

EL DERECHO A LAS ARMAS

*Breve ensayo sobre el poder, las armas y los
hombres*

J. Raúl Guerrero

NOTA LEGAL:

El autor de esta obra es D. José Raúl Guerrero Parra, a quien corresponden los derechos de autor sobre la misma. La distribución de esta obra es libre y gratuita, a condición de que se respete íntegramente su contenido. Queda prohibida la transmisión onerosa de este documento, así como la modificación de su contenido, sin la autorización del autor.

Copia digital editada en Madrid, a 9 de diciembre de 2012.

Para cualquier comunicación respecto de este documento ruego se pongan en contacto conmigo a través de la dirección de correo electrónico *raul.grpa@gmail.com*

A mi padre, por haber sido siempre un ejemplo a seguir.

ÍNDICE

1. Las armas en España	
1.1 Presentación.....	5
1.2 Fundamentos y vocación.....	6
1.3 Aclaraciones conceptuales.....	10
2. Evolución histórica.....	12
3. Las armas: clasificación y prohibiciones	
3.1 Normativa jurídica.....	18
3.2 Las armas en la Constitución.....	19
3.3 Clasificación.....	24
3.4 Régimen sancionador administrativo.....	33
3.5 El delito.....	36
3.5.1 El delito de tenencia de armas prohibidas.....	36
3.5.2 El delito de tenencia ilícita de armas de fuego.....	40
3.6 El conflicto.....	42
4. La legítima defensa	
4.1 Teoría penal.....	44
4.2 Proporcionalidad.....	47
5. Aproximación criminológica	
5.1 Situación social.....	49
5.2 Datos.....	50
5.3 Incidencia en otros países.....	53
5.4 Relación entre armas y delitos violentos.....	60
6. Conclusiones.....	62

1. LAS ARMAS EN ESPAÑA

1.1 Presentación

Pocas materias hay tan importantes para una nación como la regulación del tráfico de armas porque las armas son herramientas que otorgan gran poder al que las posee y tienen la capacidad de convertir palabras y pensamientos en hechos. El que controla las armas controla el destino de la nación: desde revoluciones hasta dictaduras, pasando por luchas de liberación, todos los grandes cambios sociales y políticos se han hecho armas mediante. Y ya sea para bien o para mal la historia nos enseña que la humanidad ha forjado su sino siempre de forma violenta. En pocos lugares esta realidad es tan fehaciente como en España.

Hemos sido una nación de soldados, literatos, pícaros audaces y hombres de armas; un pueblo que para bien o para mal hemos escrito nuestra historia con letras de sangre. De las encamisadas en Flandes, de los lances de capa y espada y de mil tropelías más siempre han sido sufridos protagonistas los buenos españoles de a pie que se han dejado la piel y las entrañas en hacer grande a este país de la única forma que han sabido: luchando y muriendo. Porque la profesión de las armas forma parte consagrada del espíritu de la nación española resulta tan incomprensible comprobar cómo en nuestros días existe tanta repulsa social hacia todo lo relacionado con el mundo castrense y con la actividad marcial. Quizás haya sido por la guerra civil, quizás por nuestro acomplejamiento crónico o simplemente porque España haya muerto, los hechos son que hemos convertido en tabú una realidad de la vida humana tan esencial y tan básica como las armas de fuego y su tenencia por parte de civiles.

Prácticamente no existen trabajos serios al respecto: ni sociológicos, ni psicológicos, ni criminológicos ni jurídicos. La normativa en materia de armas es un ejemplo de mal hacer y de chapucería institucionalizada que refleja el poco conocimiento y el desinterés, o temor según se mire, del legislador sobre el tema. En estos días que corren a nadie le da lustre, que diría Eduardo Marquina, hablar de armas, y menos si se es un jurista respetado, porque hacerlo es violar el velo de lo políticamente correcto y llevarle la contraria al buenismo progresista.

Es por todo ello que surge la apremiante necesidad de romper el silencio académico y tratar el tema con seriedad y objetividad pero con el convencimiento firme de que la nación española merece ser informada con honestidad y veracidad. Ocultar la verdad únicamente puede traer más mal que bien, por ello debemos poner de manifiesto el abandono político al que se ve sometida esta parcela del ordenamiento jurídico que tantas pasiones levanta y que tantos votos puede quitar. ¡Cómo no defender un derecho civil tan importante para la población como es la legítima tenencia de armas de fuego!

1.2 Fundamentos y vocación

Dicen que la ley nos hace iguales, pero no es la ley la que nos iguala sino la aplicación de la misma. Si existen las leyes es porque se aplican, se ejecutan, y tienen determinados efectos materiales en la sociedad. Los procesos judiciales se pueden dividir esencialmente en dos tipos básicos: los procesos declarativos y los procesos ejecutivos; en los declarativos se dirime la existencia o no de un derecho y en los ejecutivos se vela porque la existencia teórica de ese derecho se convierta en realidad. Un ejemplo de ello es que en los procesos judiciales tanto o más importante que la propia sentencia declarativa de derechos es la ejecución posterior, y ello es así porque si no se ejecuta fácticamente lo dispuesto por el juzgado el valor moral, social y humano de la Justicia es inexistente. Veámoslo en un ejemplo ilustrativo: imaginemos que un hombre asesina a otro y tras el juicio penal es condenado a su correspondiente pena, pero durante el trayecto que ha de llevarlo a la prisión se las arregla para burlar a los guardias y escapa; la investigación policial, el juicio, la sentencia condenatoria, nada de eso ha servido por cuanto la utilidad última de todo ello era ejecutar materialmente la Justicia mediante el encarcelamiento del homicida y la retribución del crimen a través de un castigo. La Justicia, entendida como auténtica virtud ordenadora de la sociedad, ve frustradas totalmente sus expectativas de cumplimiento porque el fin último al que se ordena es dar a cada uno lo suyo, en este caso encarcelar al criminal que ha transgredido las leyes naturales al asesinar a un semejante, y es en ese acto final de punición y escarnio donde reside la esencia de la misma, y si se ve impedido por cualquier circunstancia todo el proceso y toda la labor anterior carecen de sentido pues ha desaparecido el motivo fundamental por el que se instruye una causa y se enjuicia la misma. ¿Hay justicia sin ejecución?, me pregunto yo. Asumamos que la justicia no puede existir si no se ejecuta lo dispuesto por ella, entonces ¿qué está por encima, la declaración de lo justo o la ejecución de lo que es justo? Es similar a la eterna pregunta sobre si surgió antes el huevo o la gallina. Lo cierto es que más que un orden de prelación entre ambos conceptos lo que existe es una simbiosis vital en la que la existencia del uno es requisito indispensable para la del otro y viceversa. Un acto de ejecución material sin un juicio moral anterior en el que un órgano legitimado declare la existencia de un derecho no es justicia sino que es venganza, de igual manera una sentencia judicial rica en contenido y en razones que no se lleve a la práctica es poco más que polvo barrido por el viento.

Habiendo comprendido la importancia de la aplicación y la ejecución de las leyes lo que procede ahora es preguntarnos quién posee entonces la legitimidad y el poder para hacer cumplir la ley y ejecutar sus disposiciones. La respuesta varía según el país, aunque en España podemos afirmar que la exclusividad la detenta el Estado a través de los Juzgados y

Tribunales y de los Cuerpos Y Fuerzas de Seguridad del Estado. El artículo 117.3 de la Constitución señala que *“el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”*. La potestad jurisdiccional, que no es otra cosa que la facultad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, está monopolizada única y exclusivamente por los órganos jurisdiccionales. Los cuerpos policiales dependen a su vez, si bien no orgánicamente si funcionalmente, de la voluntad jurisdiccional de jueces y magistrados (art.126 CE que estipula que *la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca*). Anteriormente llegamos al consenso de que no puede haber ley si la misma no se aplica de forma material, real y fáctica. Esto es: la mera declaración de derechos no es condición suficiente para el desarrollo de la justicia pues se requiere la ejecución del derecho declarado. Luego si el monopolio de la ley, tanto en su conformación como en su aplicación, corresponde exclusivamente a Juzgados y Tribunales, entonces la Justicia en España existe únicamente dentro de los citados órganos, pues emana de ellos, y nada, absolutamente nada exógeno puede considerarse justo ni legítimo. Asumimos pues, que los ciudadanos normales no tenemos la capacidad de actuar técnicamente “con justicia” al carecer de potestad jurisdiccional. Asunto ilógico pues la propia Carta Magna consagra en su artículo 117 que *“la justicia emana del pueblo”* y vemos como en la realidad el desarrollo legislativo es ciego ante cualquier influencia de la voluntad popular en la función jurisdiccional y excluye completamente la iniciativa individual en el cumplimiento y ejecución de las leyes.

Por no poder no podemos ni siquiera ejecutar las sentencias judiciales y dependemos de la actividad que desarrolle la policía a instancia de los órganos jurisdiccionales para ver cumplidas nuestras legítimas pretensiones. Cosa que es, hasta cierto punto, lógica. Como en definitiva es la policía, en teoría brazo ejecutor del Poder Judicial aunque en la práctica los es del ejecutivo, la que ejecuta las leyes y hace que su cumplimiento sea efectivo el siguiente paso natural es preguntarnos ¿qué mecanismos utilizan los cuerpos de policía para ejecutar la justicia promulgada por Juzgados y Tribunales y que emana del pueblo? La respuesta es la amenaza coercitiva, la violencia, la fuerza de las armas. El único motivo por el que existe el Derecho y se mantiene el orden social es porque estamos obligados a ello. Esa obligación se cumple porque existe un grupo de hombres armados que son capaces de ejercer la violencia y la fuerza de manera legal, legítima e institucionalizada. El abate Faria, amigo y mentor de Edmundo Dantés durante su condena en el ominoso Castillo de If, ya se planteaba las mismas consideraciones y elucubraba sobre si el hombre podría convivir en paz sin leyes, sin guardias y sin armas, si acaso no nos mataríamos entre nosotros como bestias depredadoras. Lo cierto es que a pesar de la discusión psicológica o filosófica que esta afirmación pueda levantar la realidad de la historia humana nos demuestra que el orden y la civilización se

imponen siempre y sin excepción a través de la fuerza. El poder se sostiene sobre la fuerza de las armas.

Esta realidad histórica siempre se ha disfrazado con una serie de creaciones morales más o menos artificiales encaminadas a legitimar la jerarquía de poderes. Por ejemplo, un rey subyuga y gobierna a sus súbditos porque a cambio les ofrece protección y seguridad, o sencillamente su condición le es otorgada directamente por el dios de turno. Pero la realidad es que lo que legitima a un rey es su victoria militar sobre los adversarios. La relación de acontecimientos de cómo se estructuró la jerarquía de poder en las sociedades primitivas, trivializando la cuestión hasta el extremo, es que un señor con espada mató y se impuso sobre otros tantos señores con espadas; a este aguerrido soldado que era el más grande, el más inteligente y el que mejor mataba, lo seguían otros tantos aguerridos matarifes; amablemente le explica al pueblo que tienen que obedecerle no por dominación sino porque él los va a proteger y a cambio sólo les pide impuestos y la más absoluta obediencia; alrededor de todo esto se forma un estado, un sistema político, tributos, funcionarios y todo un sinfín de cosas que todos conocemos. Siempre ha sido así, lo sigue siendo en la actualidad y será así mientras exista la raza humana, por mucho que lo adornemos con los dulces eufemismos dialécticos de la "legitimidad democrática" y el "Estado de Derecho". ¿Acaso no descende nuestra monarquía borbónica de un linaje de genocidas cuya principal virtud era matar más y mejor que otras casas nobles? ¿Acaso no han llegado las familias nobiliarias de Europa, todas y cada una de ellas sin excepción, al poder a través de la guerra y el derramamiento de sangre? Al poder siempre se llega mediante las armas y una vez conseguido el gobernante estimula la creación de toda una cosmología literaria e intelectual que legitime su mandato.

Volviendo al razonamiento original: como la función jurisdiccional reside únicamente en Juzgados y Tribunales cuyo órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, no es elegido democráticamente por la ciudadanía, y la aplicación y cumplimiento de la función jurisdiccional depende del poder coercitivo que ejercen los cuerpos y fuerzas de seguridad, podemos afirmar con bastante acierto que la Justicia no emana del pueblo, aunque el pueblo se vea sometido al imperio de la ley. Si la justicia precisa necesariamente para su existencia de que se ejecute lo dispuesto por los órganos jurisdiccionales, y el monopolio de esa ejecución recae en el gobierno podemos afirmar con rotundidad que los ciudadanos no participan de la Justicia en la sociedad y están deslegitimados para desarrollar cualquier acción individual. El pueblo, pues, se encuentra totalmente a merced de gobernantes erráticos y de leyes injustas. Eso no es democracia ni es igualdad.

El considerar una ley justa o no es materia de la Filosofía del Derecho pero es materia de cualquier ciudadano de bien poder ejercer voz y voto sobre la creación y aplicación de las leyes para que la sociedad las pueda considerar justas. En esta España democrática y de Derecho eso no sucede. El conflicto surge en tres vertientes:

1. Si la ejecución de la justicia se hace a través del poder coercitivo violento que detentan legítimamente los agentes, utilizando la superior fuerza que otorgan las armas, el ciudadano se ve excluido totalmente de la justicia pues no tiene cabida en este sistema, no está legitimado y no tiene armas con las que equipararse al poder de los órganos jurisdiccionales. En la práctica se produce un distanciamiento entre la administración de la justicia y la ciudadanía, lo que crea inequidad e indefensión del ciudadano con respecto al poder del Estado.
2. Si bien es cierto que actualmente disfrutamos de una era de paz social en España, no es tampoco menos cierto que esta tierra se ha bañado en numerosas ocasiones con la sangre del pueblo y que durante el siglo XX sufrimos varias dictaduras y actos de barbarie contra la población civil. Como el ciudadano se encuentra en una clara situación de inferioridad respecto al poder casi imperial de los órganos jurisdiccionales y de los gobiernos en general, no es descabellado pensar que ante leyes injustas o ante otra situación dictatorial la capacidad de respuesta ciudadana sería muy limitada por carecer de armas de fuego, pues estas son el único medio eficaz para defender sus pretensiones.
3. Como la ejecución de la justicia no es competencia de los ciudadanos nos encontramos ante el absurdo de que el ciudadano necesita ejercitar cualquier derecho, por muy legítimo y verdadero que sea, única y exclusivamente a través de los cauces jurisdiccionales establecidos. Se ve pues, el ciudadano, relegado a un segundo plano en la vida de la sociedad en el que su función es meramente la de impulsor procesal o instador de actuaciones administrativas y judiciales adoptando durante todo el proceso el rol de un sujeto pasivo a pesar de que sean sus propios intereses los que se dirimen. Mencionemos el ejemplo de la legítima de defensa en el domicilio: la legislación sobre la materia está diseñada de tal manera que se desanima emprender cualquier acción personal y se promueve como única alternativa legítima el pedir auxilio a la policía.

Más allá de cuestiones ideológicas sobre la violencia y las armas la realidad es que ambas existen y son utilizadas de forma legal por los estados. El problema surge cuando se permite a un estado utilizar la fuerza coercitiva de las armas y del amedrentamiento violento pero se prohíbe terminantemente su justo empleo por parte de la población civil. El pueblo se encuentra en una situación de indefensión material ante cualquier posible abuso estatal, pierde la capacidad de ejercer presión y se ve relegado a un segundo plano en la política de la nación. Cuando los hombres están armados los gobiernos tiemblan.

Este documento surge con la vocación de defender los derechos de los civiles a la tenencia y uso de armas de fuego. En otro orden también tengo el deseo de que por encima de las diferencias ideológicas y doctrinales, y aunque no se pudiese conseguir aquello que demandamos, se puede al menos legislar la materia con cordura y a través de expertos en armas. Elevo la voz para exigir de forma argumentada un derecho que considero básico, pero sobre todo lanzo una advertencia para que las autoridades tomen conciencia de los

errores legislativos que se están cometiendo de forma que, independientemente del camino que se tome, se legisle el derecho de armas de forma sistemática, coherente y clara.

1.3 Aclaraciones conceptuales

Conviene asentar una serie de ideas básicas y aclarar determinados conceptos para erigir unos cimientos sólidos sobre los que proseguir la construcción de este texto.

¿Qué son las armas? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española las define como el “instrumento, medio o máquina destinados a defenderse”. El Reglamento de Armas parece aceptar esta definición de forma tácita pues no da ninguna otra. Parece obvio que cualquier objeto de la vida cotidiana puede llegar a utilizarse a modo de arma, incluso el propio cuerpo humano es un arma en potencia.

¿Qué clases de armas existen? Existen una inmensa variedad de armas. La clasificación más básica y simple que podemos hacer es diferenciar entre armas de fuego y armas blancas puesto que son los dos colectivos a los que los civiles tienen un acceso más fácil y cuyo uso está en mayor o menor medida legalizado.

Las armas de fuego tienen como única y exclusiva finalidad el ejercicio de una acción violenta o al menos la amenaza de la misma. Esta afirmación no es del todo exacta por cuanto también existe la vertiente deportiva y la vertiente puramente coleccionista o artística. Por el contrario, las armas blancas son multipropósito, es decir, que no sólo sirven para matar sino que también se utilizan en un sinnúmero de tareas domésticas y cotidianas. Concluimos que un arma de fuego siempre es un arma pues es un instrumento que nace con la clara vocación de segar la vida mientras que un cuchillo, arma blanca por excelencia, se puede utilizar en variadas y provechosas actividades de manera que no se lo puede definir como arma.

¿Son las armas sinónimo de criminalidad? No. Las armas son herramientas manejadas por hombres que se pueden utilizar para cometer actos delictivos pero en ningún caso las armas por sí solas son requisito suficiente para el desarrollo de un crimen puesto que en el fondo tiene que subyacer una acción volitiva humana. A sensu contrario, existen delitos en los que no median armas como por ejemplo todo el conjunto de delitos contra el orden socioeconómico. Veremos como en muchas ocasiones las armas de fuego en manos de civiles no sólo no aumentan la criminalidad de una población determinada sino que incluso llegan a reducirla significativamente y ayudan a mantener la paz y el orden social. Sin ir más

lejos, los policías, garantes de la ley y el Derecho, portan armas de fuego; ejercen la violencia legitimizada.

¿Es arma sinónimo de guerra? Sí. Verdaderamente las armas y las guerras camina de la mano porque no se pueden emprender guerras si no se dispone de un arsenal armamentístico adecuado. Las armas, y sobre todo el dinero dicho sea de paso, son requisito necesario y fundamental para el inicio de hostilidades y beligerancias.

¿Son las armas sinónimo de libertad? Desgraciadamente sí. La libertad tiene un precio, y ya dijo nuestro ilustre literato y soldado Miguel de Cervantes Saavedra que “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”. Ojalá no fuésemos esclavos de las armas para defender la libertad que a todos corresponde por nacimiento, ojalá las naciones de los hombres no malgastasen la vida de sus jóvenes en infértiles guerras, pero si llegado el caso las palabras fuesen despreciadas y las buenas razones ignoradas que no tiemble el pulso al empuñar las armas.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

“Los campesinos tienen terminantemente prohibido poseer espadas, dagas, arcos, lanzas, armas de fuego u otras armas. La posesión de estos elementos innecesarios dificulta la recaudación de impuestos y tiende a fomentar revueltas. Por consiguiente, se ordena a los Jefes de provincias, agentes del gobierno y adjuntos que reúnan todas las armas anteriormente mencionadas y las entreguen al Gobierno.”

taiko no katanagari

“La Caza de Espadas”

Decreto de Toyotomi Hideyoshi, 29 de agosto de 1588, Japón

En todas las culturas, en todas las épocas y en todos los reinos las leyes sobre tenencia de armas han sido de capital importancia y han marcado la idiosincrasia y el carácter de cada pueblo. Arriba tenemos un fragmento del decreto que promulgó el daimyo Hideyoshi al final del Sengoku-Jidai (la Era de las Guerras). Tras doscientos cincuenta años de conflictos civiles, al introducirse esta normativa ciertamente se acaba con las guerras fratricidas entre los grandes clanes, se pacifica la nación, se crea un sistema social rígido que asegurase la estabilidad del país y, en definitiva, se sientan las bases para que Japón disfrutase de tres siglos de paz. A cambio, los japoneses sólo tuvieron que entregar su libertad, y con ella la capacidad de desafiar el poder omnímodo del Estado.

“¿Merece ese hombre,”, preguntó, “Aulo Verginius, aunque no estuviera en el Capitolio, menos castigo que Apio Herdonio? ¡Mucho más, por Hércules! Si se piensa bien. Herdonio, aún si no hiciera otra cosa se declaró enemigo y con ello os avisó para tomar las armas; este hombre, negando la existencia de una guerra, os privó de vuestras armas, y os expuso, sin defensa, a merced de vuestros esclavos y de los exiliados (...).”

Arenga del Cónsul Lucio Quincinato al Senado Romano, 476 a.C.

Al otro lado del mundo tenemos las ciudades estado de la antigüedad clásica. En la Grecia de Homero las armas representaban un símbolo de estatus social y de masculinidad y eran

siempre elemento protagonista en cualquier tragedia o epopeya épica. Con la creación de las falanges de hoplitas en el siglo VII a.C. la sociedad helénica da un giro en su evolución al involucrar a los ciudadanos no pertenecientes a la nobleza en la profesión de las armas. Durante este período cada ciudadano libre tenía el deber de costearse y mantener su panoplia personal, usualmente adornada con símbolos y emblemas familiares, y de estar permanentemente preparado para la defensa militar de la ciudad mater. El efecto psicológico que esto tuvo probablemente fue radical en la concepción colectiva de lo que es el estado: las clases no aristocráticas empezaron a ocuparse de la defensa de la ciudad lo cual les supuso automáticamente la capacidad de ejercer presión activamente en la toma de decisiones políticas. Por ello la posibilidad de poseer armas y enarbolarlas en acciones bélicas era un símbolo de libertad y representaba la esencia de la ciudadanía, un privilegio y un deber al mismo tiempo. En el texto que encabeza este párrafo podemos ver como en la mentalidad romana clásica era sagrada la figura de las armas y de vital importancia para la supervivencia del conjunto de la sociedad, de tal manera que su privación era un crimen ominoso en extremo. Esta lógica se entiende puesto que la privación del derecho a las armas supone la más radical indefensión del Estado contra sus enemigos, a nivel general, y la condenación a la esclavitud política y jurídica, a nivel particular.

Un ejemplo más lo tenemos en las primitivas leyes que promulgó Enrique de Plantagenet, rey de Inglaterra durante el siglo XII, según las cuales no sólo no se prohibía la tenencia de armas sino que se configuraba como una obligación cívica en aras de tener una población siempre dispuesta a defender al reino según ordenase el monarca. Es curioso comprobar cómo en los primeros documentos escritos que dan lugar al nacimiento del Derecho anglosajón, o Common Law, ya se regulaba la tenencia de armas, entre otros asuntos de tanta importancia como la propiedad privada o los juicios por jurado. La conclusión: desde que los seres humanos se han ordenado en sociedades estructuradas el gobernante siempre se ha ocupado de forma prioritaria de regular la posesión y tráfico de armas dada su importancia vital como elemento de presión en la toma de decisiones políticas. Las armas son un elemento antropológico tan fuerte que despiertan profundos sentimientos en las psiques humanas, y cuya esencia está íntimamente ligada a la lucha constante de nuestra especie por la supervivencia individual y colectiva, constituyéndose como herramientas para enfrentarnos y dominar a las fuerzas de la naturaleza y en no pocas ocasiones para competir por el predominio sobre otros grupos.

Vemos como las armas siempre son un objeto característico y diferenciador de las clases sociales: los que las poseen gobiernan y los que no las poseen son gobernados. La nobleza samurái japonesa disfrutaba del privilegio de ser los únicos que podían portar espadas. Los caballeros europeos ostentaban también el monopolio sobre las armas y el ejercicio de la guerra. Incluso en el mundo antiguo la tenencia de armas marcaba la diferencia entre hombres libres y esclavos. La realidad es que en todas las sociedades existe siempre una élite gobernante que ejerce el dominio a través del poder que les confiere el monopolio sobre las armas. Sólo cuando todos los ciudadanos de un país posean armas, o al menos tengan la

oportunidad de adquirirlas libremente, podremos decir que no existe diferenciación entre clases sociales.

Observamos también que las leyes que se adoptan en un momento determinado de la historia modifican sustancialmente los comportamientos sociales y las ideas aceptadas como moralmente correctas por el común de la ciudadanía. Si un legislador legaliza la tenencia de armas se creará entonces entre los gobernados la sensación de que son, como individuos, piezas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, mientras que si por el contrario la tenencia de armas es prohibida se observa como progresivamente se va desarrollando una suerte de aversión emocional hacia todo lo concerniente a las mismas y consecuentemente el papel del ciudadano en el desarrollo del juego político pierde peso. Esa herencia legal perdura durante generaciones y queda inserta en el subconsciente colectivo. Por esa razón resulta de tanta importancia el estudio histórico de la evolución y cambios de las leyes sobre tenencia de armas entre la población civil. Es de señalar que independientemente del modelo social que se siga no parece existir una relación entre las armas y la criminalidad pues sociedades poco armadas como España, que son muy restrictivas en cuanto al control de las armas, presentan elevadas cifras de criminalidad en comparación con otros países del mismo entorno socioeconómico con normativas laxas y favorables a la posesión de armas de fuego; luego se elimina el nexo entre armas y criminalidad derribando así el falso mito de que las armas inducen pasivamente a la criminalidad, más al contrario se demuestra como la criminalidad está ligada a factores de otra índole como la educación, el nivel económico, el entorno social etc...

Sin importar los derroteros que vayan a seguir las normas jurídicas que se adopten cualquier legislador responsable entiende que regular con acierto esta materia es una necesidad de estado. Parece, por tanto, del todo ilógico que la legislación sobre armas en España esté en tal estado de obsolescencia, abandonada por los estudiosos de las ciencias jurídicas y redactada con tan poco rigor. Poca relevancia cuantitativa se le ha dado a esta materia en nuestro ordenamiento jurídico en comparación con la extensión y calidad de los textos jurídicos que la regulan en países vecinos como Inglaterra, Alemania o Francia. Me resulta cuanto menos curioso que un pueblo como el español, tan sanguíneo y conflictivo, que ha hecho correr ríos de tintas sobre todo tipo de temas, haya dedicada tan pocas páginas al asunto que nos ocupa. Veamos, pues, de qué manera se ha forjado el derecho a las armas a lo largo de la historia española.

Si tenemos que comenzar por un momento histórico concreto cuál mejor que el feliz casamiento de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469. Mediante este matrimonio se consuma la unión dinástica de los dos reinos y pasamos de referirnos a los diferentes reinos a hablar, por primera vez y con pleno derecho, del reino de España. ¿Qué mejor comienzo en el estudio de la evolución de la legislación sobre armas en España que el momento mismo de su nacimiento como Estado?

Es natural comprender que durante aquella época las armas fuesen un objeto más de la vida cotidiana de los pobladores de España porque se vivían los últimos coletazos del régimen medieval tradicional y la guerra era un problema endémico. Precisamente fue en esos años en los que se llevaron a cabo las últimas empresas militares de la Reconquista y acto seguido se descubrió América. Todo ello juntado con las perennes guerras continentales por la hegemonía en Europa hizo de España una nación beligerante en la que la profesión de las armas era a la vez económicamente provechosa y socialmente prestigiosa. En este marco histórico sería imposible plantearse la prohibición de poseer armas, aún menos el control de la producción o el comercio de las mismas. Es más, los Reyes Católicos no sólo no prohibieron las armas sino que incentivaron su tenencia como un deber y una obligación.

A pesar de ello el afán legislativo de la recientemente constituida corona no pasaría por alto la necesidad de regular, al menos en parte, la portabilidad de armas. Un ejemplo de su preocupación y compromiso con el problema que representaban las armas en la población civil y el crimen ligado a ellas es la creación de la Santa Hermandad, organización que algunos historiados califican como el primer cuerpo de policía de la historia, a modo de medida de control de la delincuencia y de aseguramiento del orden civil. En una línea más privada los Reyes Católicos prohibieron portar las armas personales en determinados lugares y situaciones como medida para aumentar la seguridad de las grandes personalidades del reino y de los eventos de especial trascendencia. Posteriormente, en la Pragmática de Valladolid los Reyes Católicos vuelven a hacer alusión al tema al proscribir la portación de armas en *“la Corte, romerías, y otros lugares donde exista aglomeración de personas”*. Esta norma denota una creciente preocupación por consagrar y mantener un orden público en los espacios oficiales y en eventos multitudinarios. De forma tácita el legislador aquí entiende que las personas armadas pueden suponer un serio problema a la paz social y poseen un elevado potencial para causar desórdenes graves. Vetando la portación de armas en estas situaciones específicas se aseguran que en caso de haber algún altercado el causante pueda ser fácilmente reducido por las tropas reales ya que al no estar armado no podría oponer una resistencia efectiva. Es remarcable el hecho de que hace quinientos años ya se reconocía el potencial letal y de intimidación psicológica que tienen las armas, y que no es el mismo el daño que puede causar un agresor armado que uno desarmado.

En el año 1516 asciende al trono Carlos I de la Casa Habsburgo, dinastía que gobernaría hasta 1700 con la muerte de Carlos II. La vocación normativa y ordenadora de la Casa de Austria es bien conocida, sobre todo durante el reinado de Felipe II (1556-1598). Durante este período nunca se llega a prohibir la tenencia de armas sino que en el mejor de los casos se regulan y restringen determinadas armas específicas como los rejonos, los jíferos, o la longitud y características de espadas y puñales. Un ejemplo de esto lo tenemos en una ley dada por Felipe II en el año 1564 según la cual se manda que *“ninguna persona, de cualquier calidad y condición que sea, no sea osado de traer ni traya espadas, verdugos ni estoques de más de cinco cuartas de vara de cuchilla en largo”*. Con el paso de los años la presión legislativa sobre la tenencia y porte de armas va en aumento. Un ejemplo es la ley

promulgada por Felipe IV en el año 1654 en la que se viene a estipular que “*ningún alguacil, ni otro juez ministro ni oficial de sala ni otras personas pueden usar ni traer en nuestra Corte ni fuera de ella espadas con vainas abiertas, ni estoques, verdugos buidos de marca, o mayores que ella*”. Los Austria en ningún caso llegaron a hacer prohibiciones generalizadas sobre las armas y como se ha podido ver se limitaron a regular casos concretos y muy delimitados. Era la costumbre en la época que los hombres fuesen armados públicamente.

Con la llegada al poder de los Borbones el afán regulador sobre las armas se ve impulsado. Durante el siglo XVIII se emitieron numerosas leyes con la pretensión de controlar y administrar la tenencia de armas reduciendo cada vez más el acervo de armas permitidas. Un ejemplo es la Ley de 21 de diciembre de 1721 en la que se da un salto cualitativo y se prohíben las armas blancas pequeñas, de tal suerte que “*a los que fueren aprehendidos con puñales, jíferos, rejones y otras armas cortas blancas, si fuera noble, la pena de seis años de presidio, y si fuese plebeyo, seis años de galeras*”. La normativa de control sobre el uso de toda índole de armas continúa adelante y en 1760 se promulga la Real Orden de Carlos III de 1 de septiembre en la que se veta “*á la gente de Mar y Pasajeros, después de saltar en tierra, el uso de cuchillos flamencos, de que se sirven en los navíos para sus maniobras a bordo*”. Un año después, en 1761, en la Real Pragmática de 29 de abril de Armas Prohibidas quedan proscritas tajantemente las “*pistolas, trabucos y toda arma que no llegue a vara*” y los “*puñales, rejones, guijeros, almaradas, cuchillos de punta, chicos o grandes, aunque sean de cocina, los de moda o faltriquera, y navajas de muelle con golpe seguro o virola, y daga sola*”. Quizá fue debido a las ideas ilustradas de la época o simplemente por el aumento de poder y autoridad del Estado central, lo cierto es que paulatinamente fue desapareciendo el derecho individual de los ciudadanos a tener y portar armas pasando el Estado a ocupar un papel protagonista en la materia. Es en el siglo XVIII donde encontramos el punto de inflexión entre una sociedad española libre y armada y pasamos a una nación sufrida dominada tanto legal como psicológicamente por la autoridad de los reyes y los ministros. Es curioso comprobar cómo a medida que se endurecen las leyes y se controla a la población decrece el poder y la gloria del imperio español, y se establece una relación inversamente proporcional entre el control autoritario del Estado sobre el pueblo y la prosperidad de España.

El gran salto cualitativo se produce con el Código Penal de 1822 en el que por primera vez se regula de manera metódica el reproche penal a la tenencia de armas ilícitas así como a la tenencia sin licencia de armas permitidas. Del Título III dedica el Capítulo IX entero “*De la fabricación, venta, introducción y uso de armas prohibidas*”.

Debemos destacar el artículo 358 que dice literalmente que “*el que fabricare, introdujere, vendiere o de cualquier otro modo suministrar en España alguna de las armas generalmente prohibidas por los reglamentos especiales de la materia, perderá todas las que se le aprehendieren de esta clase para los efectos expresados en el artículo 90 del título preliminar, pagará una multa equivalente al valor de las mismas, y sufrirá un arresto de ocho*

días a cuatro meses". Es un claro ejemplo de una técnica legislativa denominada "ley en blanco" mediante la cual se nos remite para determinar cuáles son las armas prohibidas a "los reglamentos especiales de la materia". En este caso la norma que clasifica las armas prohibidas es la anteriormente citada Real Pragmática. Este sistema utilizado en el Código Penal de 1822 volverá a emplearse en el Código Penal de 1995, el cual nos remitirá al Reglamento de Armas para determinar las armas prohibidas. Es preciso mencionar que tanto en el uno como en el otro existen armas intrínsecamente prohibidas, esto es que bajo ninguna circunstancia se permite su uso o tenencia, y armas legales pero que requieren de permisos administrativos, siendo en este último supuesto constitutivo de delito la tenencia de las mismas sin las debidas autorizaciones.

El Código Penal de 1870 rebaja considerablemente el reproche penal a la tenencia de armas. Para empezar elimina el concepto de arma prohibida y únicamente recoge la opción de condenar como falta la tenencia sin licencia de armas. Concretamente su artículo 591 dice que *"Serán castigados con la pena de 5 a 25 pesetas de multa (...) los que usaren armas sin licencia"*. Con el Código Penal de 1928 se endurece la pena para la tenencia de armas que pasa a ser un hecho constitutivo de delito y se pena con *entre "dos meses y un día a tres años de prisión y multa de 1.000 a 2.500 pesetas"*. El de 1932, sin embargo, vuelve a suavizar la reprimenda legal al calificar de nuevo la tenencia de armas como falta, específicamente diciendo en el artículo 563 que se castigará *"con la pena de uno a cinco días de arresto y multa de cinco a cien pesetas los que dentro de población o en sitio público o frecuentado dispararen armas de fuego, cohetes, petardos u otro proyectil cualquiera que produzca alarma o peligro"*. Nuevamente el Código Penal de 1944 vuelve a endurecer las penas y en su artículo 254 se estipula que *"la tenencia de armas de fuego fuera del propio domicilio sin poseer la guía y la licencia oportunas, o en el propio domicilio sin la guía de pertenencia, se castigará con la pena de prisión menor"*. La misma dicción literal para este delito se mantendrá en el Código Penal de 1973. Como podemos observar en los códigos de 1870, 1928, 1932, 1944 y 1973 existe un delito, o falta según el caso, de tenencia ilícita de armas. Solamente en los códigos de 1822 y de 1995 existe el concepto de arma prohibida en sí misma.

Y finalmente llegamos al actual Código Penal de 1995.

3. LAS ARMAS: CLASIFICACIÓN Y PROHIBICIONES

3.1 Normativa jurídica

Llegados al momento actual lo que procede es hacer un exhaustivo análisis de las normas y reglamentos que conforman el corpus de la legislación sobre armas. No existe un único código que recoja las normas al respecto, fundamentalmente porque la legislación sobre las armas abarca varios órdenes jurídicos: desde el Derecho constitucional al Derecho penal, pasando por el administrativo.

La lista de textos jurídicos sobre la materia es la siguiente:

- Constitución Española de 1978
- Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas
- Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
- Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo
- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza
- Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970
- Directiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas

Las armas no pueden ser objeto independiente del estudio jurídico pues por sí mismas no entrañan ninguna complejidad, sino que las discusiones surgen de las actividades humanas que se pueden desarrollar utilizando armas, y es por ello que más que estudiar la normas jurídicas sobre armas lo que analizamos son todos aquellos hechos en los que interviene el uso de armas. En España el derecho a las armas no se configura como un derecho fundamental recogido en nuestro texto constitucional y por lo tanto no podemos afirmar que realmente tengamos un "derecho a la tenencia de armas". En realidad, el hecho de que

tengamos en posesión o en propiedad armas de fuego siempre viene provocado en nuestro ordenamiento como una consecuencia del ejercicio de otro derecho o de otra actividad legal que requiere para su efectivo desarrollo el uso de un arma. Por ejemplo, un cazador tiene licencia de armas porque caza, y así lo prevé la ley, y cualquier otro posible uso que le dé al arma sería ilegítimo. Principalmente la justificación para adquirir una licencia de armas va ligada a ser un policía o militar de profesión o a la práctica de algún deporte (tiro deportivo y caza).

¿Por qué no disfrutamos del derecho a la tenencia de armas de forma independiente y autónoma? ¿Realmente es lógico que las armas sólo estén disponibles para deportistas y cazadores? ¿Por qué considera el Estado que es peligroso que la ciudadanía esté armada? Si la Constitución garantiza mi derecho a la libertad, ¿por qué no disponemos de medios para poder ejercitar y defender esa libertad a nivel personal?

Como las leyes que afectan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no son objeto de este estudio, por seguir cauces legales completamente diferentes y fundamentarse en principios jurídicos y derechos que nada tienen que ver con los que aquí tratamos, centraremos el análisis de las normas en todas aquellas facetas relacionadas con la ciudadanía civil. Estas facetas giran en torno a la necesidad de poseer medios efectivos para la defensa personal y familiar, las variedades de armas que un ciudadano cualquiera puede adquirir legalmente y los vacíos legales que pudiesen acarrear sanciones administrativas o penales.

3.2 Las armas en la Constitución

La referencia inicial consta en el Título VIII de la Constitución Española, Capítulo III de las Comunidades Autónomas, en el artículo 149.26 en el que se dice que el Estado tiene competencia exclusiva en el “*régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos*”. Nótese que el artículo no se encuentra dentro del Título I (derechos y deberes fundamentales) lo cual es bastante significativo en cuanto a que queda claro que la tenencia de armas no es un derecho constitucional. Tal es así que actualmente España es uno de los países del mundo más restrictivos en el control y tenencia de armas de fuego. Como no aclara que se entiende por arma necesariamente nos remitiremos a lo dispuesto por las leyes accesorias y sobre todo por lo que el Reglamento de Armas considera son armas.

Aunque el artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada lo cierto es que el 149.26 hace un importante recorte en cuanto al caso concreto de las armas de fuego. Si ya la propiedad misma del arma queda condicionada al hecho de que el propietario reúna determinados requisitos la posesión material está todavía más recortada. Por ejemplo, podría darse el caso de que por herencia mortis causa adquiramos la propiedad de una

escopeta, la cual tendría que depositarse en la Intervención de Armas de la Guardia Civil en caso de que el heredero no estuviese facultado para poseer el arma, con lo cual vemos nuestra capacidad de posesión bastante disminuida. En definitiva, el art. 149.26 de la Constitución limita totalmente el derecho a la propiedad sobre las armas y le da al legislador la capacidad de fijar la horquilla de prohibiciones que rigen la materia.

En principio la redacción del artículo parece lógica y está en consonancia con la legislación de otros países de nuestro entorno europeo al reservar la regulación de la materia única y exclusivamente al Estado democrático. El texto viene enmarcado dentro de las competencias que el Estado, a través del Gobierno de la Nación y de las Cortes Generales, se reserva frente a las Comunidades Autónomas, y siendo esto así es comprensible que no se permita la regulación sobre armas, al ser un asunto tan importante, a las diferentes Comunidades. Atendiendo a nuestro pasado y asumiendo que cada región española posee una cultura y una identidad en cierta medida diferenciadoras se puede pensar que si tuviesen capacidad para legislar sobre armas se darían situaciones muy encontradas y resultados completamente opuestos entre unas zonas y otras. Y no sólo eso, también pudiera resultar peligroso para la integridad nacional que en un estado cuasi federal como éste, con escisiones, luchas civiles y conflictos independentistas, que las diversas Comunidades Autónomas tuvieran a su alcance los medios para dotar a sus movimientos ideológicos independentistas de armas con las que luchar activa y violentamente por la independencia de sus regiones. Las Españas, que se decía antiguamente, siempre han sido un crisol de culturas, de idiomas y de costumbres diversas, y el aseguramiento de la estabilidad y unidad nacional sólo puede venir del consenso pacífico entre las diversas identidades culturales de España. Es por todo ello que resulta acertado adjudicar al Estado central la competencia en esta materia y en sentido opuesto habría sido una insensatez otorgársela, en mayor o menor medida, a las Comunidades Autónomas. En este aspecto el legislador ha estado tremendamente acertado.

En cuanto al comercio, el problema no surge tanto de la reserva de la competencia sobre el mismo al Estado sino de las implicaciones morales que ello conlleva. Me explicaré mejor: resulta cuanto menos contradictorio que un Estado que predica la carestía armamentística para con sus ciudadanos, el pacifismo político y el progresismo moral sea a la vez el mismo Estado que genera al año 1.600 millones de euros en beneficios por venta de armas a potencias extranjeras de dudosa reputación. Como dijimos con anterioridad es materialmente imposible llevar a cabo guerras sin armas, es por ello que el control del comercio de armas resulte tan importante y sea una de las principales peticiones de las ONG y de organismos como las Naciones Unidas (Resolución 64/48 sobre el proyecto de un Tratado sobre el Comercio de Armas) o la Unión Europea (Decisión 2010/336/PESC del Consejo, de 14 de junio de 2010, relativa a las actividades de la UE en apoyo del Tratado sobre el Comercio de Armas, en el marco de la Estrategia Europea de Seguridad [Diario Oficial L 152 de 18.6.2010]). Como dentro de la Unión Europea existe un Mercado Interior es muy importante reforzar los controles aduaneros externos para controlar el tráfico de armas que entra en Europa, pues una vez dentro del mercado común resultará muy difícil

restringir el tránsito de armas ilegales entre países miembro. Por poner un ejemplo, la mayor parte de armas ilegales tales como subfusiles, pistolas o rifles de asalto que entran a Europa lo hacen por la frontera oriental a través de las antiguas repúblicas soviéticas, utilizando principalmente el tráfico rodado a pequeña escala a través de carreteras. Volviendo a la diatriba inicial, no podemos menos que señalar lo hipócrita de nuestra política pacifista y la vez el enorme lucro que para el Estado supone la industria armamentística y el comercio internacional de armas, en el que estamos situados en el sexto lugar en volumen de exportaciones de armas a nivel mundial. El 40% de esas exportaciones son a países no pertenecientes a la OTAN o a la Unión Europea, entre los que podemos encontrar a Colombia, Venezuela, Marruecos (vecino nuestro famoso por su laxitud y vaguedad en la aplicación de los derechos humanos), Indonesia o incluso a la Libia de Gadafi. A pesar de ello se ha avanzado bastante en la materia y desde la publicación de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, las exportaciones de armas se viene controlando mucho mejor. En ese sentido debemos citar el artículo 8 de la referida ley que establece que se suspenderán las licencias de exportación cuando, entre otros casos, *“existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”*. A pesar de ello el control actualmente sigue siendo insuficiente y se siguen vendiendo armas a países inestables políticamente y con precarios derechos civiles y humanos como Sri Lanka o Tailandia. Los órganos encargados de velar por el cumplimiento de esta ley son la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso y el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. También debemos hacer mención a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando en la que se sanciona administrativamente la exportación de armas sin licencia y hace mención a la posible realización de un delito. Ya en el Preámbulo de la ley se manifiesta que la misma nace con la vocación de controlar la exportación española de armas al exterior pero no se ocupa de la importación de las mismas, asunto para el cual debemos remitirnos al Reglamento de Armas en sus artículos 59 a 66 en los que de forma genérica aborda tanto la exportación como la importación. Aún así la realidad es que en esos artículos apenas se hace alguna mención indirecta al fenómeno de la importación de armas por lo que nos encontramos con una actividad mercantil de gran calado social a la que la ley no dedica lo suficiente y que queda muy mal regulada. En definitiva, respecto del comercio de armas, tenemos un volumen de exportación importante que en ocasiones choca con la orientación moral del Estado español, y por otro lado un mercado de importación poco regulado.

Referente al artículo constitucional, la normativa sobre *“tenencia y uso de armas y explosivos”* cristaliza en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, y en el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. Sobre la tenencia debemos señalar que la misma se refiere a la posesión de armas y podemos suponer que implica la propiedad del arma, caso en el que nos remitimos al derecho civil. Aunque la propiedad de un arma aúna la tenencia y la voluntad de ser dueño de la misma, la estructura de la legislación al respecto configura una propiedad muy controlada y supervisada por el Estado. Vemos una clara limitación del artículo 33.1 de la Constitución, el cual garantiza el derecho a la propiedad privada, al restringir ese derecho en el caso de las armas según el arbitrio del Estado. Podría entenderse que esta limitación también viene recogida en el mismo artículo 33, en el punto 3, por motivo de utilidad pública o interés social, entendiendo que el Estado considera peligroso que los ciudadanos puedan acceder libremente a la compraventa de armas de fuego. Hasta tal punto podría llegar la interpretación del artículo que ciñéndonos a la dicción literal del mismo el legislador podría prohibir totalmente la tenencia de armas, no sólo de fuego sino también de cualquier otra variedad o índole que el Reglamento de Armas interprete como tales. El mensaje es claro: el Estado tiene poder absoluto sobre la regulación de las armas. La realidad es contundente: el legislador está constitucionalmente facultado para prohibir absolutamente la propiedad de toda clase de armas en la población. Las consecuencias preocupantes: un gobierno, que en la práctica controle el poder legislativo a través de su mayoría en el Congreso, puede privar a la ciudadanía del acceso a las armas y a la defensa personal y colectiva de sus intereses.

Se hace mención a las armas en artículo 21.1 al expresar que *“se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas”*. La lógica del articulado no necesita mucha explicación más allá del entendimiento de que a priori pudiera parecer sensato evitar que colectivos de personas armadas puedan reunirse en grandes grupos para evitar cualquier acto subversivo o rebelde contra el Estado y contra la sociedad en general, y más concretamente para evitar cualquier actividad terrorista organizada o un intento de golpe de estado. Aún así esta visión no es compartida por ordenamientos jurídicos de otros lugares del mundo y en países como Estados Unidos los ciudadanos pueden reunirse portando armas de fuego e incluso llevarlas visibles en la calle. Huelga mencionar que la idiosincrasia del pueblo americano difiere mucho de la del español y actualmente resulta inimaginable una escena de esa guisa en las calles españolas. Como los criterios sociales españoles no conciben tal idea es lógico, aludiendo al *Volkgeist* de Savigny, que el legislador no contemple la opción y haya vetado la posibilidad de realizar reuniones portando armas. Por otro lado es una aversión subjetiva e infundada pues la experiencia nos muestra que precisamente los mejores ciudadanos serán los que se reúnan en público y los que porten armas a la vista consigo ya que no tienen nada que ocultar a la sociedad, y en un alarde de compromiso cívico muestran una gran responsabilidad al portar un arma de fuego y un elevado grado de entrega con la sociedad al hacerse cargo personal del cuidado y protección de la comunidad.

El artículo 15 consagra el derecho a la vida y a la integridad física. Para que dichos derechos sean efectivos el Estado debe desplegar medios eficaces para su cumplimiento. Esos medios, consagrados también por la Constitución, son eminentemente jurisdiccionales (artículo 24 sobre la tutela judicial efectiva, recurso de amparo de los artículos 53.2 y 161.1.b, recurso de inconstitucionalidad de los artículos 53.1 y 161.1.a, y Defensor del Pueblo cuyas cometido viene en el artículo 54). El gran problema que tienen los medios judiciales es que generalmente el daño ya está causado cuando se acude a ellos y lo que se busca en la vía jurisdiccional es la reparación del mismo. Entonces, ¿qué medios verdaderamente efectivos existen para proteger al ciudadano ante un ataque inminente a la vida o a la integridad física? Es evidente que ni los cuerpos policiales ni todos los órganos jurisdiccionales de España pueden servir de mucha ayuda ante la acción o actividad que atente contra esos derechos, principalmente porque suele ser una conducta criminal y los delincuentes no suelen avisar a la policía de su agenda social. La única medida racional para salvaguardar la vida y la integridad física ante un ataque inmediato es sencillamente todo medio, instrumento o posibilidad que tenga el agredido a su alcance para hacer frente al agresor y defenderse. Llegado el caso podría ser la víctima la que agrede y lesione al criminal al intentar defenderse. El Código Penal prevé una eximente de responsabilidad criminal para este tipo de supuestos, pero veremos más adelante como se articula este concepto y profundizaremos debidamente. Volviendo al cauce principal, es contradictorio que la Constitución nos otorgue un derecho tan importante como es la vida pero a la vez no nos dote de apoyo legal para proteger ese derecho tan legítimo y tan fundamental. ¿De qué sirve acudir a los órganos jurisdiccionales cuando el daño ya está hecho si lo que intentamos evitar es la producción misma del daño? Es aquí donde las armas de fuego entran en escena como elemento de defensa personal para garantizar la vida y la seguridad. Esta utilización de las armas no está contemplada en nuestro ordenamiento pero es, sin lugar a dudas, la principal función de las armas de fuego en la vida civil. Esta corriente de pensamiento ha sido integrada en los ordenamientos jurídicos de la práctica totalidad de los países de Europa, con el claro ejemplo de que nuestros vecinos Francia e Italia conciben la posibilidad de adquirir armas de fuego como medida de protección de la vivienda y de los miembros de la familia. Pero como no podía ser de otra manera. Si tenemos derecho a la vida y a la integridad física y hay que desarrollar medidas para una efectiva protección de los mismos, es lógico pensar que la principal amenaza viene por parte de asaltos criminales en los que la acción ocurre al instante y por lo tanto las principales medidas de protección deberán referirse a la defensa personal ejercitable por el agredido, que por otro lado es el primer interesado en defender su derecho a la vida. Incomprendiblemente en el ordenamiento jurídico español no se contempla expresamente esta posibilidad o si se hace es de forma somera, tácita e insuficiente al no dotar de los medios materiales para que verdaderamente los propios ciudadanos puedan defender sus derechos. La ley debe ir en una doble dirección: por un lado mejorar las medidas judiciales de castigo ya existentes y por otro lado, y en preferencia a la sanción judicial, crear verdadero sustento legal para que existan medios realistas y factibles que permitan al ciudadano defenderse él mismo si llegase el caso y evitar la comisión del daño.

Dice el dicho popular que es mejor prevenir que curar, pero en este caso la ley es muy deficiente al no dar apenas posibilidades al ciudadano para prevenir el ataque contra su integridad cuando es precisamente en el instante durante el cual se desarrolla la acción criminal cuando más contundentemente hay que actuar porque el daño todavía no está hecho y se puede prevenir. Nuestro legislador ha adoptado la postura opuesta y otorga preeminencia a la sanción posterior antes que a la prevención, lo cual es demencial a mi humilde pero probablemente acertado modo de ver.

En el artículo 17 se hace otra importante declaración al asegurarse que *“toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”*. Las medidas de protección de estos derechos son esencialmente las mismas que las recogidas en el artículo anteriormente descrito. Volvemos a la concepción paternalista del Estado con respecto al ciudadano. A pesar de tener derechos reconocidos constitucionalmente no estamos facultados como ciudadanos a defender los mismos de una forma legítima y legal a través de nuestros propios medios y de nuestra iniciativa personal. Esa facultad recae en el Estado que se viene configurando como supremo agente protector del pueblo español, función ésta bastante discutible si repasamos la historia española sobre las relaciones del estado con el pueblo. Parece incongruente que los ciudadanos tengamos un abanico de derechos tan grande pero se nos trate como a niños necesitados de educación y supervisión constante. Tres siglos después sigue vigente aquél famoso lema del despotismo ilustrado que rezaba *“todo para el pueblo pero sin el pueblo”*.

3.3 Clasificación

El Reglamento de Armas se aprobó mediante Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. Deroga el antiguo Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 2179/1981, de 24 de julio. Es la norma jurídica fundamental respecto de las armas en España. Como no tiene rango de ley sino que fue aprobado por Real Decreto corresponde al Gobierno la potestad para modificar los diferentes artículos o aprobar un nuevo reglamento. Esto significa que suele haber muy poco consenso público en lo referente a las modificaciones del reglamento, y de hecho, recientemente se propuso una modificación bastante importante que cogió por sorpresa a todos los aficionados a las armas, y fruto de una masiva campaña de protesta y presión social se consiguió frenar la aprobación del nuevo texto.

El Reglamento se aprueba estando en vigor el Código Penal de 1973 en el cual no existía el delito de tenencia ilícita de armas, y por ello el Reglamento surge como una norma con carácter sancionador únicamente administrativo aunque posteriormente, con el Código Penal de 1995, haya adquirido una relevancia en el ámbito penal al enumerar las armas prohibidas a las que se refiere el nuevo delito de tenencia de armas prohibidas.

La temática que abarca es bastante amplia y cubre el comercio de armas, la fabricación, los permisos y autorizaciones, la tenencia y el transporte, la clasificación y el régimen sancionador. La exposición de motivos es bastante esclarecedora acerca del surgimiento de este reglamento. Inicialmente nos remite a los artículos 3, 6 y 7 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. El artículo número 6 dice textualmente que *“en el ejercicio de la competencia que le reconoce el artículo 149.1.26 de la Constitución, la Administración del Estado establecerá los requisitos y condiciones de la fabricación y reparación de armas, sus imitaciones y réplicas, y de sus piezas fundamentales; explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos; así como los de su circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación; su tenencia y utilización”*. Como vemos la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana establece un mandato claro y directo para la creación de éste reglamento. A su vez, la misma ley nos remite al anteriormente mencionado artículo 149.1.26 de la Constitución para fundamentar el mandato y la legitimación del Estado en la regulación de la materia. También se hace referencia a la necesidad de incorporar el Derecho europeo derivado en nuestro ordenamiento interno, concretamente la Directiva 91/477/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas así como el Capítulo sobre Armas de Fuego y Municiones del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Da un paso más allá de lo estipulado por el Derecho Comunitario cuando hace una importante aseveración que denota la finalidad del legislador al declarar que el Reglamento de Armas *“pretende regular las armas de propiedad privada que pueden poseer y utilizar los particulares y los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Servicios de Seguridad Privada”*. Explícitamente se está reconociendo una suerte de derecho independiente y autónomo que tienen los particulares a la tenencia en propiedad de armas de fuego. Pero no sólo armas de fuego sino que también se incluyen todo tipo de armas no de fuego que encajan en alguna de las definiciones parciales que da el Reglamento de las clases de armas que existen.

Pero más importante que todo lo anterior es el reconocimiento tácito al derecho de utilizar las armas como elemento de defensa personal cuando se dice que existen *“necesidades subjetivas de los ciudadanos de adquirir armas, con fines de seguridad, de ocio y esparcimiento, o de simple ornato y coleccionismo”*. Si bien las leyes actuales no reconocen abiertamente el derecho libre de los particulares a tener armas como elemento de seguridad y defensa personal es cuanto menos notorio que el Consejo de Ministros haya aprobado un texto del que se deduce que, al menos de forma generalizada, la sociedad entiende y reconoce que las armas tienen eminentemente una función de protección. Aunque la ley sea muy restrictiva a la hora de conceder licencias para armas de fuego como medio de defensa lo anteriormente citado es un primer paso para el reconocimiento pleno de este derecho para toda la ciudadanía en general.

Dentro del articulado del Reglamento haremos hincapié en aquellos capítulos que más relación tengan con el enfoque de este proyecto. Es de mencionar que al artículo 4 excluye

del ámbito de aplicación del Reglamento la adquisición, tenencia y uso de armas por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia así como sus centros e instalaciones, por estar reguladas esas cuestiones en leyes especiales.

El artículo 2 nos ofrece una lista detallada con definiciones de los diversos tipos de armas que contempla el Reglamento pero no llega a establecer ninguna definición de lo que se considera un arma. A pesar de ello nuestra jurisprudencia, en Sentencia del tribunal Supremo de 21 de marzo de 1984 (RJ 1984/2292), define "arma" como "todo instrumento apto para ofender o defenderse". Entenderemos que todos aquellos objetos que escapen a lo descrito por las definiciones parciales del artículo dos no podrán ser considerados como armas a efectos del presente Reglamento. Ello en base al principio de legalidad pues sería incongruente con los principios ordenadores del derecho sancionador administrativo y del punitivo penal hacer una interpretación extensiva de las definiciones aquí referidas. El artículo 3 clasifica todas las armas concebidas por el Reglamento en siete categorías en atención a sus características, grado de peligrosidad y destino presumible. La categoría en la que se enmarca un arma determinada es importante en la medida en que las diferentes licencias de armas que concede la Administración hacen referencia a categorías determinadas que abarcan un conjunto de armas. Por ejemplo, la licencia de armas tipo D permite tener hasta 5 armas de la categoría 2.2 (armas largas rayadas para caza mayor). Además, el encabezado del propio artículo deja claro que se trata de una enumeración *numerus clausus*, como no podía ser de otra manera para salvaguardar el principio de legalidad en relación con las sanciones administrativas y los delitos en referencia a las armas. Las armas recogidas y clasificadas en el artículo 3 son armas permitidas, es decir lícitas, pero que requieren de licencias administrativas para su tenencia y utilización. Son las siguientes:

- *Primera categoría. Armas de fuego cortas: Comprende las pistolas y revólveres.*
- *Segunda categoría:*
 1. *Armas de fuego largas para vigilancia y guardería: Son las armas largas que reglamentariamente se determinen por Orden del Ministerio del Interior o mediante decisión adoptada a propuesta o de conformidad con el mismo, como específicas para desempeñar funciones de vigilancia y guardería.*
 2. *Armas de fuego largas rayadas: Se comprenden aquellas armas utilizables para caza mayor. También comprende los cañones estriados adaptables a escopetas de caza, con recámara para cartuchos metálicos, siempre que, en ambos supuestos, no estén clasificadas como armas de guerra.*
- *Tercera categoría:*
 1. *Armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo, de calibre 5,6 milímetros (22 americano), de percusión anular, bien sean de un disparo, bien de repetición o semiautomáticas.*
 2. *Escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa, o que tengan cañón con rayas para facilitar el plomeo, que los bancos de pruebas reconocidos*

hayan marcado con punzón de escopeta de caza, no incluidas entre las armas de guerra.

3. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre que la energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios.

- *Cuarta categoría:*

1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.


- *Quinta categoría:*

1. Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.

2. Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos.

- *Sexta categoría:*

1. Armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, conservadas en museos autorizados por el Ministerio de Defensa, si son dependientes de cualquiera de los tres Ejércitos, y por el Ministerio del Interior, en los restantes casos.

2.  Las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean anteriores al 1 de enero de 1890, y las reproducciones y réplicas de las mismas, a menos que puedan disparar municiones destinadas a armas de guerra o a armas prohibidas.

La antigüedad será fijada por el Ministerio de Defensa, que aprobará los prototipos o copias de los originales, comunicándolo a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

3. Las restantes armas de fuego que se conserven por su carácter histórico o artístico, dando cumplimiento a lo prevenido en los artículos 107 y 108 del presente Reglamento.

4. En general, las armas de avancarga.

- *Séptima categoría:*

1. Armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyectiles que faciliten la captura o control de animales, anestesiándolos a distancia durante algún tiempo.

2. Las ballestas.

3. Las armas para lanzar cabos.

4. Las armas de sistema Flobert.

5. *Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines deportivos.*
6. *Los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanzabengalas.*

El artículo 4 es probablemente el de mayor trascendencia de todo el Reglamento de Armas porque en él se detalla una lista de las armas prohibidas. Citarlo literalmente y al completo es obligación.

1. Se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones:

- a. *Las armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente las características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización de modelo o prototipo.*
- b. *Las armas largas que contengan dispositivos especiales, en su culata o mecanismos, para alojar pistolas u otras armas.*
- c. *Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín.*
- d. *Las armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u otros objetos.*
- e. *Las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto.*
- f. *Los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda.*
- g. *Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas, combinadas con armas blancas.*
- h. *Las defensas de alambre o plomo; los rompecabezas; las llaves de pugilato, con o sin púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados; los munchacos y xiriquetes, así como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas.*

2. No se considerará prohibida la tenencia de las armas relacionadas en el presente artículo por los museos, coleccionistas u organismos a que se refiere el artículo 107, con los requisitos y condiciones determinados en él.

La importancia de la enumeración arriba descrita surge del hecho de que tanto el derecho administrativo sancionador como el derecho penal nos remiten a este artículo para determinar si existe o no una conducta reprochable jurídicamente.

El conflicto doctrinal surge en el momento en el que tenemos que acotar las definiciones de armas prohibidas ya que siendo su tenencia un delito castigado con penas de cárcel es de vital importancia fijar una serie de definiciones muy precisas. La duda reside no tanto en las armas de fuego como en las armas blancas. El Doctor y profesor Segrelles de Arenaza ya califica el Reglamento como defectuoso "por cuanto conduce a conclusiones y soluciones difícilmente sostenibles, particularmente en lo que se refiere a las armas que no son de fuego". Se utilizan términos poco afortunados, desconocidos por la población en general y sobre todo no se da una definición clara de lo que se debe entender al hablar de cada uno de esos objetos. Únicamente se detalla con precisión lo que es un puñal (hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda).

Vayamos por partes:

En cuanto a las armas de fuego no hay demasiada confusión pues existen numerosísimos documentos tanto jurídicos como científicos que delimitan lo que es un arma de fuego, además del hecho de que cualquier ciudadano reconoce y entiende lo que es. La jurisprudencia del Tribunal Supremo define de manera muy sencilla el "el arma de fuego" como aquella capaz de propulsar proyectiles mediante la deflagración de la pólvora. Un punto a debatir son las armas largas, véase escopetas, a las que se les recortan los cañones. En este último caso hay jurisprudencia variada: por un lado algunas veces se considera que ello es alterar sustancialmente las características de fabricación del arma y otras veces se ha optado por entender que realmente no afecta a la capacidad de disparo y por lo tanto no es una modificación ilícita. Exactamente lo mismo ocurre con el uso de silenciadores.

Las armas no de fuego. La primera en ser mencionada es el bastón-estoque. Es un arma cuya peligrosidad reside en que el que la porta suele pasar desapercibido y no es identificado como una persona armada. No es más letal que cualquier otro tipo de arma blanca pero su condición de arma camuflada ha hecho que el legislador la incluya en la lista de armas prohibidas. A pesar de ello lo cierto es que la jurisprudencia viene considerando sistemáticamente que no es un arma que merezca el reproche penal y por lo tanto generalmente se absuelve de la posesión de este objeto en la jurisdicción penal.

Los puñales de cualquier clase vienen descritos en el propio artículo y huelga reiterarnos en la literalidad del mismo. Cabe añadir que son también considerados puñales las navajas "mariposa" que concuerden con los requisitos mencionados.

Las navajas automáticas son aquellas cuya hoja sale propulsada hacia afuera gracias a un mecanismo de resorte que se activa generalmente pulsando un botón. La hoja puede salir por la punta del mango o por un lateral describiendo un semicírculo. Hay de varios tipos y modelos. No confundir con navajas de apertura asistida. El motivo que ha considerado el legislador para incluirlas en el selecto grupo de armas prohibidas es que se pueden sacar con una sola mano de forma muy ágil e intuitiva, lo cual las hace especialmente útiles en la comisión de delitos varios.

Las defensas de alambre o plomo, también conocidas como "porras". Las porras extensibles también se incluyen dentro de este grupo (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2001). Los objetos similares, sin embargo, contruidos de forma casera o artesanal no son considerados como defensas de alambre o plomo, y así lo entiende una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, sección 3ª, de 20 de septiembre de 2001, en la que se dice que "cualquier objeto que esté compuesto por plomo y acero, fabricado de modo artesano mediante la unión de determinados elementos simples que forman otro complejo no puede entrar en el concepto de defensa de plomo o de alambre, sino de objeto contundente que puede causar un daño físico evidente a la integridad de las personas".

El rompecabezas es un arma ofensiva compuesta por dos bolas de hierro o plomo sujetas a los extremos de un mango flexible y corto. No existen sentencias condenatorias por el uso de este artilugio dado que su utilización es poco común. Es algo raro y extravagante que se haya incluido este objeto tan poco común y tan peculiar dentro de las armas prohibidas. Parece no obedecer a ningún criterio objetivo por parte del legislador.

Las llaves de pugilato son lo que comúnmente se entiende por puño americano. Existe un caso, en el que en Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona núm. 479/1998 (Sección 2ª), de 14 septiembre, se condena a un hombre por la mera tenencia física de un puño americano en el bolsillo. La sentencia arguye que "es de aplicación el art. 565 del Código Penal, ya que la Sala estima que de la ausencia de antecedentes del acusado, de las propias características del arma y de la falta de elementos que permitan afirmar la intención del acusado de usar el arma con fines ilícitos, debe ser de aplicación el citado precepto, rebajando en un grado la pena señalada en el artículo 563". Aunque se le rebaja la pena acaba siendo condenado penalmente.

El tiragomas o tirachinas es la horquilla con mango a cuyos extremos se unen los de una goma para estirla y disparar así piedrecillas, perdigones, etc... ¿Qué debemos entender por un tirachinas prohibido? Es complicado porque es un "juguete" extendido entre niños y adolescentes. ¿Debe realmente estar dentro de las armas prohibidas? Lo cierto es que determinados modelos tienen un elevado grado de peligrosidad y son utilizados en acciones de guerrilla callejera y vandalismo. El Reglamento no especifica una potencia determinada como criterio seleccionador de los tirachinas peligrosos y por tanto considerables como prohibidos al amparo de la ley. De la dicción literal del artículo podríamos llegar al absurdo de considerar que el tirachinas con el que juega un niño de 14 años es un arma prohibida y que por lo tanto está cometiendo un delito. En tal caso, la práctica totalidad de la población española ha incurrido alguna vez en la comisión de este tipo penal.

Cerbatanas perfeccionadas. El artículo no define lo que entiende por "perfeccionada" de manera que estamos en un caso de difícil acotación del significado del mismo. Las cerbatanas son armas muy simples de construir y su funcionamiento es extremadamente básico y

primitivo, este es la acción del aire pulmonar a través de un tubo. La peligrosidad de las cerbatanas no proviene del arma en sí sino del proyectil o dardo con el que se cargue.

Lo que el Reglamento denomina *munchacos* (el término tal cual no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española) no es otra cosa que un *nunchaku* o *nunchaco*. Es un arma de escasa utilización actual que queda prácticamente relegada al ámbito de la práctica de artes marciales orientales. Es bastante hilarante como en este caso el legislador no ha sido ni siquiera capaz de escribir correctamente el nombre del objeto, lo cual denota un profundo desconocimiento de la materia y una falta de investigación e información a la hora de redactar la norma. Quizá ese día el señor legislador acababa de ver una película de ninjas en la que algún vengador vestido de negro y con pasamontañas aniquilaba él sólo un ejército enemigo, y de ahí a la neurosis anti-nuchakus sólo hay un paso.

Los xiriquetes son lo que conocemos como estrellas ninja. Es un arma originaria de Japón. No existe demasiada justificación ni técnica ni lógica para incluir esta clase de objeto dentro de las armas prohibidas. Es evidente que en esta ocasión los redactores de la norma se reunieron a ver una maratón de cine chino sobre ninjas mientras consumían extrañas setas de dudosa procedencia. Si no, no me explico su total aversión a las armas históricas orientales. El Supremo avala la calificación del xiriquete como arma prohibida dado que su uso potencial no puede ofrecer las dudas inherentes a la posesión de otros instrumentos, como es el caso de las navajas, que puede responder a usos y costumbres generalizadas en determinados ambientes totalmente ajenos al mundo de la delincuencia. *“El xiriquete es un arma evidentemente peligrosa y propia de acciones agresivas; no de acciones defensivas”*, afirman los juzgados. Es evidente que los magistrados de la AP de Girona también acudieron a ese maratón de cine oriental aderezado con frutos silvestres. Cabe añadir que en el diccionario de la lengua española de la RAE no existe el término xiriquete. Tenemos aquí otro ejemplo de creatividad lingüística por parte del legislador.

La mayor aberración jurídica del artículo se encuentra en su cláusula de cierre cuando entiende que es un arma prohibida *“cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas”*. Este apartado queda excluido del conjunto de de armas prohibidas según Sentencia del Tribunal Supremo 163/2001, de 9 de febrero. En tal sentido Sentencia Tribunal Supremo núm. 74/2001, de 22 enero, en la que ,refiriéndose a una espada samurái, se concluye que *“es manifiesto que el sable de 70 cm de hoja que portaba el acusado no entra dentro del catálogo de armas prohibidas, por más que su tenencia como arma sujeta a determinadas restricciones (ver art. 5.3) pueda ser sancionada administrativamente si se incurre en infracción de este orden, pero en ningún caso su posesión puede considerarse delictiva al no pesar sobre ella una prohibición completa y absoluta”*.

También existe jurisprudencia en sentido contrario aunque no es la corriente dominante. Ver Sentencia del Tribunal Supremo núm. 878/2001, de 18 mayo, en la que se declara acerca de unos cohetes pirotécnicos caseros, que *"el proyectil confeccionado por el acusado constituye un arma prohibida, que, como dice la jurisprudencia de esta Sala, entraña un serio peligro para la vida e integridad de las personas creando, indudablemente, una situación objetiva de riesgo, por lo que deben los hechos ser subsumidos bajo dicho tipo penal"*. Ver también Sentencia Tribunal Supremo núm. 1316/1998 de 6 noviembre, acerca de una herramienta de trabajo modificada dice el tribunal que es *"una herramienta con capacidad lesiva considerable e incluso mortal"*.

Por ello entendemos que el concepto *"cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas"* es tan amplio y puede abarcar un acervo tan variado de instrumentos que la decisión de si es un arma prohibida o no, así como la extensión de sus efectos punitivos ya sean administrativos o penales, debe quedar a juicio del juzgador según cada caso concreto atendiendo al hecho de que el legislador ha pretendido crear una suerte de cajón de sastre con objetos demasiado diversos. Es a todas luces un error que contradice la doctrina de *numerus clausus* en materia de armas prohibidas cuya tenencia tiene repercusiones penales, y viola además las garantías básicas de cualquier ciudadano a conocer qué es delito y qué no lo es.

Finalmente mencionar que el artículo 6 del Reglamento de Armas hace una clasificación de lo que se considera como arma de guerra. Son:

- a. *Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros.*
- b. *Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre inferior a 20 milímetros, cuyos calibres sean considerados por el Ministerio de Defensa como de guerra.*
- c. *Armas de fuego automáticas.*
- d. *Las municiones para las armas indicadas en los apartados a y b.*
- e. *Los conjuntos, subconjuntos y piezas fundamentales de las armas y municiones indicadas en los apartados a a d), así como, en su caso, sus sistemas entrenadores o subcalibres.*
- f. *Bombas de aviación, misiles, cohetes, torpedos, minas, granadas, así como sus subconjuntos y piezas fundamentales.*
- g. *Las no incluidas en los apartados anteriores y que se consideren como de guerra por el Ministerio de Defensa.*

Estas armas quedan terminantemente prohibidas para los particulares y únicamente podrán utilizarlas los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Gobierno, a

propuesta e intervención de los ministerios de Defensa e Interior regulará esta materia y las armas que se establecen como dotación permitida para los militares y los cuerpos de policía.

3.4 Régimen sancionador administrativo

¿La tenencia ilegal de un arma cualquiera debería multarse administrativamente o, por el contrario, es merecedora del reproche penal? Quizá lo razonable sería adoptar una u otra postura en atención a la gravedad del hecho y la peligrosidad del arma en cuestión. Si eso es así, ¿dónde pondríamos la línea divisoria? Lo cierto es que la evolución histórica de la legislación nos muestra que el legislador ha cambiado de criterio no pocas veces, y que donde hoy se aplica la sanción administrativa mañana podría ser penal y viceversa. Nuestro ordenamiento sostiene un criterio efectivamente condicionado a la clase de arma de que se trate. Sin embargo, la triste realidad jurídica es que debido a la deficiente redacción al respecto del Reglamento de Armas, de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, nos enfrentamos a una situación de ambigüedad, inseguridad y desproporcionalidad en los criterios punitivos.

Comencemos por el Derecho sancionador administrativo en materia de armas. Lo primero que hay que diferenciar es entre las armas prohibidas (artículo 4 del Reglamento de Armas) y las armas lícitas (que vienen recogidas y clasificadas en el artículo 3 del Reglamento de Armas). Para las armas designadas como prohibidas queda tajantemente vetada su fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso. En cambio, las armas lícitas pueden poseerse, usarse y transmitirse, y dependiendo de su clasificación requerirá una determinada licencia administrativa a tal efecto, o incluso, en algunos casos, su compraventa y tenencia se podrá hacer libremente (por ejemplo algunas clases de armas blancas) sin necesidad de licencia administrativa de ningún tipo.

El articulado que contiene las normas sancionadoras administrativas en materia de armas consiste en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento de Armas y en el artículo 23 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El artículo 155 dice:

Si no constituyeren delitos, serán consideradas infracciones muy graves por la entidad del riesgo producido y sancionadas:

a. La fabricación, reparación, almacenamiento y comercio:

- 1. De armas de fuego prohibidas o de armas de guerra sin la adecuada habilitación (...).*

- b. *De armas de fuego de defensa personal, de armas largas rayadas, de armas de vigilancia y guardería y de armas largas de ánima lisa, sin la pertinente autorización (...).*
- c. *El uso de armas de fuego prohibidas (...).*
- d. *El uso de armas de fuego cortas, careciendo de la licencia, autorización especial o de la guía de pertenencia (...).*

Abre el artículo con la cláusula de subsidiariedad con respecto al Código Penal. Posteriormente veremos como la jurisprudencia y la doctrina han creado, no sin conflictos, una serie de criterios para establecer cuando se debe acudir al delito y cuando a la sanción administrativa. Como podemos ver el artículo que nos ocupa sanciona esencialmente el tráfico comercial y el almacenamiento de las armas de fuego prohibidas (art. 4.1.a-e) así como su uso, o de armas lícitas (art.3 categorías 1 a 4) sin la debida licencia. La sanción va de los 30.050,61 hasta los 601.012,1 euros.

El artículo 156, en la misma línea que al anterior dice:

Si no constituyeren delito, serán consideradas infracciones graves, y sancionadas:

- a. *Cuando se trate de armas blancas, de aire comprimido o de las demás comprendidas en las categorías 4 a 7 del presente Reglamento, la fabricación, reparación, almacenamiento, distribución y comercio de armas prohibidas o de armas reglamentadas sin autorización (...).*

Esta vez se sancionan las armas prohibidas no de fuego o de armas permitidas sin autorización de los tipos mencionados en el artículo. Es un texto ambiguo de cuya redacción literal no se deduce claramente que tipo de armas o elementos pueden ser sancionados a través de este artículo. Obsérvese que tanto el artículo 155 como el 156 no sancionan la mera tenencia del arma.

El artículo 157 sí que sanciona la tenencia ilícita de armas permitidas cuando dice que *serán consideradas infracciones leves y sancionadas (...) las tipificadas en los apartados b a f del artículo anterior, referidas a armas blancas, de aire comprimido, o las demás comprendidas en las categorías 4 a 7 (...).* Nos remite al artículo 156, cuyo apartado f menciona *la adquisición, tenencia, cesión o enajenación de armas por particulares, sin tener las autorizaciones o licencias prevenidas al efecto.* En definitiva, este artículo castiga la tenencia ilícita de armas permitidas pero en ningún caso sanciona la tenencia de armas prohibidas. Recordemos que los arts. 155 y 156 tampoco sancionan la mera posesión material de armas prohibidas.

Para poder sancionar administrativamente la tenencia de armas prohibidas tenemos que acudir 23.a de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que establece como

infracción grave *la fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, adquisición o enajenación, tenencia o utilización de armas prohibidas o explosivos no catalogados; de armas reglamentarias o explosivos catalogados careciendo de la documentación o autorización requeridos o excediéndose de los límites permitidos, cuando tales conductas no sean constitutivas de infracción penal.* Por lo tanto, para poder sancionar legalmente la simple tenencia de armas prohibidas se aplica este artículo.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que las normas sancionadoras en materia de armas no están bien redactadas, no son claras y sobre todo que ambas leyes no se complementan entre sí como debiera ser. Por ejemplo, el art.23 de la de Protección de la Seguridad Ciudadana sanciona la tenencia ilícita de armas permitidas, cuando el mismo hecho también lo sanciona al artículo 157 del Reglamento de Armas. Entonces, ¿cuál de ellos aplicaremos? Este tipo de problemática, que se repite en varias ocasiones, crea conflictos en la práctica policial y en la calificación jurídica de los hechos. Esto puede provocar el absurdo de que dependiendo de qué artículo se aplique para un mismo hecho se imponga una sanción pecuniaria diferente según el texto legal al que acudamos.

Independientemente del hecho de que un arma sea legal y se tenga la debida licencia en caso de necesitarla, ello no implica que se pueda portar libremente por la calle. El artículo 146 del Reglamento de Armas dice al respecto:

1. Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquiera clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de las categorías 5, 6 y 7. Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia en especial si se trata de armas amparadas en licencias B, por razones de seguridad.

2. Deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los concurrentes a establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento, así como en todo caso los que hubieran sufrido condena por delito o falta contra las personas o la propiedad o por uso indebido de armas o sanción por infracción de este Reglamento.

Es decir, que se establece una prohibición general de portar armas fuera del domicilio, especialmente en lugares públicos o concurridos. Ahora bien, se deja abierta la posibilidad de que el agente de la autoridad decida no sancionar el hecho de portar el arma por considerar que no existe ningún tipo de peligrosidad o que, atendiendo a las circunstancias, al momento y al lugar, es completamente razonable portar ese tipo de arma. Para poner un ejemplo ilustrativo imaginemos una escapada al campo de 3 o 4 días, a pescar o simplemente

a disfrutar de la naturaleza, situación en la que es completamente comprensible llevar un cuchillo utilitario o una navaja. En tales casos sería poco justo que el agente se viese obligado legalmente a imponer siempre una sanción. Esta cláusula es beneficiosa y coherente y deja al buen juicio del agente la posibilidad de sancionar o no según su criterio profesional.

La realidad es que la ley no permite portar armas blancas, pero tampoco lo prohíbe taxativamente. En lugar de fijar un criterio claro se acude a la fórmula de dejar la decisión según el *prudente criterio de las autoridades y sus agentes*. El sistema empleado es muy ambiguo y crea inseguridad jurídica al no saber el portador del arma blanca cuando incurre en una actividad sancionable y cuando no.

Por lo tanto podemos concluir que en general no es ilícito portar cualquier tipo de arma, pues la prohibición general no es absoluta ya queda condicionada al criterio del agente de policía. En cuanto al procedimiento sancionador, generalmente se fundamentará positivamente en el artículo 23 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.

3.5 El delito

3.5.1 El delito de tenencia de armas prohibidas

Donde verdaderamente se despliega el peso de la Justicia es en el Derecho penal por su consecuencia última, esta es la privación de la libertad, una medida tan extrema que para aplicarse debe haber existido un hecho tremendamente reprobable a ojos de la sociedad. Es por este motivo que las normas penales deben ser especialmente refinadas en cuanto a la técnica jurídica empleada para su elaboración y a la vez deben ser toscas en su simplicidad para que sean fácilmente comprensibles para la sociedad en general, destinatarios últimos de las mismas. El Código Penal dedica el Capítulo V del Título del Título 22 a la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos. Comprende los artículos 563 a 570, aunque nosotros nos ocuparemos únicamente del 563, 564 y 565.

Dice el artículo 563:

La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, será castigada con la pena de prisión de uno a tres años.

Un análisis ortodoxo del mismo no sugiere lo siguiente:

1. Que la actividad delictiva consiste en la mera tenencia o posesión de armas prohibidas o de armas reglamentadas sustancialmente modificadas.
2. Consecuentemente tendremos que acudir al artículo 4 del Reglamento de Armas para determinar cuáles son las armas prohibidas.
3. El arma ha de ser capaz de funcionar eficazmente de forma que entrañe un peligro real, es decir, que no esté inutilizada.
4. El sujeto activo es cualquier persona, mientras que el sujeto pasivo es la sociedad y el Estado.
5. Es un delito de simple actividad, permanente en el tiempo y sobre todo es un delito de peligro abstracto.
6. Como es un delito de simple actividad se consuma con la mera tenencia del arma, con independencia de que se llegue usar o no.

Todas estas conclusiones encierran conflictos jurídicos muy importantes. En primer lugar, es chocante que la mera tenencia de un arma prohibida pueda ser constitutivo de delito cuando existe armas no de fuego cuyo poseedor podría ni siquiera saber que lo que tiene en su casa es un arma prohibida. A colación de lo anterior es cuanto menos discutible la técnica empleada de acudir a una norma con rango de reglamento para definir lo que incluye el tipo penal. La técnica de ley penal en blanco que nos remite a una norma de rango inferior susceptible de ser fácilmente modificada es un sistema harto criticado por la doctrina cuyas características son poco apropiadas para los delitos penales. No es coherente, por lo tanto, que todas las armas prohibidas descritas por el Reglamento de Armas sean incluibles en este delito. También hay que discutir en profundidad si verdaderamente el sujeto pasivo es la sociedad y el Estado y sobre todo cual es el bien jurídico protegido porque de la respuesta que obtengamos se desglosarán una serie de conclusiones que afectarán sensiblemente a la naturaleza del delito de tenencia de armas prohibidas. Indiscutiblemente un arma es un instrumento que por sí solo no entraña ningún riesgo, más bien es la utilidad que se le da lo que define su peligrosidad. El concepto de peligrosidad se ha obviado de la tipificación penal del delito y llegamos al absurdo de penar la mera posesión corporal independientemente de la actividad que la rodee.

Pero volvamos al principio de todo. Ya con la aprobación misma de este artículo existió un intenso debate parlamentario sobre si incluir o no las armas no de fuego dentro del delito tipificado en el artículo 563. La argumentación para no incluirlas era muy sencilla: *"no concurren circunstancias de peligrosidad suficientes para la consideración de la conducta como delictiva por la mera posesión de armas que no sean de fuego prohibidas. No concurren esas circunstancias objetivas de peligrosidad, y no merece un reproche punitivo tan intenso como el que aquí se consigna, la posesión de armas prohibidas que no sean de fuego (...)".* Evidentemente tal postura no fue la que finalmente se adoptó. De ello se extrae que habiendo existido un debate parlamentario activo referente a esta cuestión, y habiéndose adoptado explícitamente la decisión de incluir en el tipo penal a las armas prohibidas no de fuego, debemos entender que tal decisión fue tomada conscientemente por el legislador. Por

ello no cabría en un principio ninguna duda sobre el hecho de si deben incluirse las armas no de fuego en el delito, pues es obvio que sí debe hacerse. A pesar de ello el sentido común nos sugiere que la remisión que se hace al Reglamento de Armas es poco acertada y no es descabellado pensar que el legislador no tuvo en cuenta las consecuencias de este hecho.

La Fiscalía General del Estado tomó cartas en el asunto ante la ausencia de un criterio claro que delimitase lo que debía ser entendido penalmente como arma prohibida. En la Consulta 14-94 entiende que la tenencia de armas prohibidas no debe interpretarse de acuerdo al excesivo rigor que sugiere el precepto penal, sobre todo y muy especialmente en lo referente a armas prohibidas no de fuego. Entiende también que en las armas no de fuego el tipo delictual penal debe excluir la simple posesión material o domiciliaria de las mismas.

Surge pues una distinción en cuanto a si el arma prohibida es de fuego o no como, así se deduce de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2001. Si es un arma de fuego prohibida del artículo 4.1 del Reglamento de Armas automáticamente estaremos ante un delito, aún cuando no exista una actividad de peligrosidad efectiva con el arma puesto que se entiende que su mera tenencia ya es en sí un hecho peligroso y sería por lo tanto un delito de peligro abstracto. Si no es un arma de fuego, para que su tenencia sea constitutiva de delito, es necesario que exista una situación de manifiesta peligrosidad y no basta con la mera tenencia material.

Para aportar un poco más de luz al asunto el siguiente paso es definir cuál es el bien jurídico protegido por el tipo penal. Existen dos posturas doctrinales enfrentadas. Una sostiene (DÍAZ-MAROTO) que el bien a proteger es la seguridad general, esto es la integridad y la vida de las personas, el patrimonio y el orden público. Otra sostiene (CARBONELL, VIVES y SERRANO GÓMEZ) que el bien jurídico a proteger es la seguridad comunitaria, concretamente la seguridad de la vida de las personas respecto del riesgo que para la misma entraña la circulación de armas. La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1993 afirma que la *"tenencia ilícita de armas constituye una infracción de actividad o de mero riesgo o peligro general y abstracto o comunitario, objetivo y de propia mano; hallándose la "ratio legis" o finalidad del precepto, traslucimiento del bien jurídico atendido por la norma, en la protección de la seguridad de la comunidad social, en la defensa de la sociedad y del orden público, ante el mal uso que eventualmente pudiera realizarse de las armas de fuego"*.

La conclusión lógica es que en cuanto a la tenencia de armas prohibidas no de fuego no se puede seguir un criterio de peligro abstracto, porque supondría aplicar con excesiva severidad la tipificación del delito y se vulneraría de manera flagrante el principio de mínima intervención del Derecho penal. Debe existir por lo tanto un mayor grado de acción que la mera tenencia, criterio que la Fiscalía General del Estado concreta en la *"traducción dinámica consistente en comerciar, portarlas en establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento o utilizarlas sin adoptar las medidas necesarias para*

no causar peligro o daño a personas o cosas". Además de la voluntad manifiesta de poseer el arma, para que exista delito, debe existir una voluntad de utilizar dicha arma.

En palabras del abogado Belestá Segura:

"La "traducción dinámica" no puede ser otra más que el uso efectivo de esas armas. El uso no ha de consistir necesariamente en su empleo contra los bienes jurídicos protegidos, sino que basta la proximidad del riesgo para estos bienes jurídicos. Porque esto y no otra cosa significa peligro concreto. Así el porte de estas armas en la vía pública o en establecimiento públicos, no supone un peligro concreto contra la vida y la integridad física de nadie. Solamente se pondría en peligro cuando se usaran dichas armas, en el sentido antedicho."

Para aportar claridad al conflicto doctrinal el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en Sentencia 24/2004, de 24 de febrero, fijando un límite a la extensión del concepto penal de arma prohibida. Dice el Constitucional que para que la tenencia de un arma prohibida pueda ser castigada penalmente deben concurrir los siguientes requisitos:

- Que sea materialmente un arma.
- Que su tenencia también se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el reglamento al que la ley penal nos remite.
- Que el arma en cuestión posea una especial potencialidad lesiva.
- Que se dé una situación en la que exista un peligro real para la seguridad ciudadana.

También dice la mencionada sentencia del Constitucional que aunque existe una remisión al Reglamento de Armas, y precisamente por este hecho, debe *excluirse del ámbito de prohibición del art. 563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los arts. 4 y 5 del Reglamento de armas mediante una Orden ministerial conforme a lo previsto en la disposición final cuarta; por impedirlo la reserva de ley que rige en materia penal.* Evidentemente el empleo de la técnica legislativa de la ley en blanco produce una disminución de las garantías que deben regir el Derecho penal, concretamente debido al hecho de que se difumina la definición concreta de lo que es una conducta típica en este tipo penal.

Si bien Supremo y Constitucional han adoptado esta postura de no incluir en el tipo penal la mera tenencia de armas prohibidas no de fuego (un puño americano, un puñal, un xiriquete...) la controversia no ha quedado del todo claro pues el propio Tribunal Supremo ha dictado algunas sentencias en sentido contrario. Esta jurisprudencia discordante avala la inclusión de la cláusula última del apartado *h* del artículo 4 del Reglamento de Armas (cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas) dentro del tipo penal. Algunas de esas sentencias son: Sentencia del Tribunal Supremo 1587/1998, de 21 diciembre, Sentencia del Tribunal Supremo 1541/1999, de 28 octubre, y la Sentencia del Tribunal Supremo 878/2001, de 18 mayo, en la se condena por la tenencia de cohetes pirotécnicos modificados ya que *"el proyectil confeccionado por el*

acusado constituye un arma prohibida, que, como dice la jurisprudencia de esta Sala, entraña un serio peligro para la vida e integridad de las personas creando, indudablemente, una situación objetiva de riesgo, por lo que deben los hechos ser subsumidos bajo dicho tipo penal". En el sentido opuesto está la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 74/2001, de 22 enero, según la cual no se puede considerar como arma prohibida una katana "Samurai" porque "es manifiesto que el sable de 70 cm de hoja que portaba el acusado no entra dentro del catálogo de armas prohibidas, por más que su tenencia como arma sujeta a determinadas restricciones (ver art. 5.3) pueda ser sancionada administrativamente si se incurre en infracción de este orden, pero en ningún caso su posesión puede considerarse delictiva al no pesar sobre ella una prohibición completa y absoluta."

Como el Reglamento de Armas es poco claro y el Código Penal no aclara adecuadamente la remisión abierta al mencionado reglamento, surge un conflicto de interpretación que ha sido abordado por el Tribunal Supremo. En algunas ocasiones sí se han incluido las armas prohibidas no de fuego dentro del tipo penal (apartados *f* y *f* del artículo 4 del Reglamento de Armas), aunque la jurisprudencia del Supremo ha venido a establecer un criterio de *peligro concreto* según el cual la mera posesión material de armas prohibidas no de fuego no es constitutivo de delito, criterio que viene a ser avalado por el Constitucional al desarrollar una serie de requisitos para que se dé tal circunstancia de peligrosidad.

Por lo tanto, de todo lo anteriormente expuesto, se extraen las siguientes conclusiones:

1. El delito de tenencia de armas prohibidas del artículo 563 del Código Penal se puede dividir a su vez en delitos diferenciados: uno es la tenencia de armas de fuego prohibidas y el otro es la tenencia de armas no de fuego prohibidas.
2. En la tenencia de armas de fuego prohibidas el bien jurídico protegido es la seguridad general y el orden público del Estado, luego es un delito de peligro abstracto y por lo tanto la mera tenencia sería constitutiva de delito.
3. En la tenencia de armas no de fuego prohibidas el bien jurídico protegido es la integridad y la seguridad de las personas, es por ello que para que la conducta sea típica penalmente tiene que darse una situación de riesgo manifiesto y verdadero y nunca será punible penalmente la mera tenencia o posesión material, sin perjuicio de las sanciones que se pudieran imponer administrativamente.

3.5.2 El delito de tenencia ilícita de armas de fuego

Para finalizar abordaremos el delito de tenencia ilícita de armas de fuego. Se recoge en el artículo 564 del Código Penal y consiste en un tipo básico y en otro cualificado. El tipo básico estipula que:

La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, será castigada:

- 1. Con la pena de prisión de uno a dos años, si se trata de armas cortas.*
- 2. Con la pena de prisión de seis meses a un año, si se trata de armas largas.*

En cuanto al elemento objetivo. La actividad consiste en la tenencia de armas de fuego reglamentadas pero careciendo de la debida licencia administrativa. Para determinar lo que se entiende por arma de fuego acudiremos al Reglamento de Armas. Además, el arma de fuego debe poder funcionar o en su defecto que sea posible arreglarla para que funcione. El sujeto activo es cualquier persona. El sujeto pasivo lo constituye tanto la sociedad en general como el Estado.

En cuanto a los elementos subjetivos. Debe existir *animus possidendi* o *animus detinendi*. Es un delito de simple actividad, permanente y de peligro abstracto. Para incurrir en el delito no hace falta usarla sino que se consuma con la simple tenencia del arma. La pena depende de si es un arma corta o un arma larga. Nos remitimos a la clasificación del Reglamento de Armas.

El tipo cualificado del 564 dice que:

Los delitos previstos en el número anterior se castigarán, respectivamente, con las penas de prisión de dos a tres años y de uno a dos años, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- 1. Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los tengan alterados o borrados.*
- 2. Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español.*
- 3. Que hayan sido transformadas, modificando sus características originales.*

Acerca de los elementos objetivos del tipo. La acción es la misma que en el tipo básico, esto es la tenencia de armas de fuego reglamentadas sin licencia. De igual manera el arma debe funcionar. El sujeto activo puede ser cualquiera y el sujeto pasivo es la sociedad y el Estado.

Sobre los elementos subjetivos: son los mismos que en el tipo básico excepto la pena que pasa a ser en entre uno a dos años de prisión.

El artículo 565 supone un tipo privilegiado del 564 e implica la posibilidad de rebajar la pena.

Los Jueces o Tribunales podrán rebajar en un grado las penas señaladas en los artículos anteriores, siempre que por las circunstancias del hecho y del culpable se evidencie la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos.

Deben cumplirse dos requisitos: circunstancias del hecho y antecedentes del culpable que evidencien que no tenía la intención de cometer un delito. Debe quedar claro que no existía ninguna intención por parte del acusado de utilizar el arma en cuestión para un fin ilícito (SSTS de 10 de julio de 1985, SSTS de 11 de febrero de 1988 y SSTS de 22 de septiembre de 1995).

Respecto al artículo 564 ocurre un caso muy curioso que debe ser analizado con minuciosidad. La duda surge sobre qué hacer cuando a una persona con licencia de armas le caduca la misma y pasa a estar en una situación en la que posee un arma de fuego pero no tiene el permiso administrativo necesario. ¿Estaría incurriendo en un delito?

La Consulta 14/97 de la Fiscalía General del Estado aborda la cuestión y trata el caso de que el legítimo propietario de un arma de fuego incumpla su obligación de renovar la licencia y la revista del arma para la validez de la guía. Parece incongruente que una situación que no se sanciona administrativamente sí que lleve aparejada un reproche penal. Es, a todas luces, un caso que no se debe incluir dentro del tipo penal del artículo 564 del Código Penal. En este sentido la Fiscalía General del Estado concluye que *“la tenencia de armas de caza y, en general de toda arma de fuego corta o larga de las no prohibidas a particulares, con fines exclusivamente coleccionistas, siempre que se limite al espacio físico definido por el propio domicilio, se acredite su valor histórico o artístico y se aporte el informe de aptitud psico-física exigido por el RA, carece de tipicidad”* y que *“el incumplimiento de las renovaciones de la licencia, así como de la revista de armas para la validez de la guía de pertenencia, no son encajables en el tipo penal del art. 564.2”*.

Por lo tanto podemos afirmar con rotundidad que un cazador o un tirador olímpico al que le expire la licencia de armas y que por determinados motivos no la renueve, aunque siga poseyendo el arma en su casa, no incurre en un delito penal.

3.6 El conflicto

Hemos podido observar como existe un manifiesto conflicto entre las normas sancionadoras administrativas y las penales de manera que en ocasiones queda poco claro si se debe aplicar la ley penal o el Derecho administrativo, o incluso dentro de las propias normas administrativas no queda claro que precepto debe aplicarse. Verdaderamente nos encontramos ante una situación intolerable en la parcela del Derecho penal por cuanto se crea una situación de manifiesta inseguridad jurídica para los ciudadanos al no quedar delimitada con claridad la conducta penal del delito de tenencia ilícita de armas prohibidas. Lo cierto es que la mayoría de la población desconoce siquiera que existen armas que no son

de fuego cuya tenencia puede ser constitutiva de delito. Para más inri la propia jurisprudencia se contradice en lo que considera un arma prohibida en el ámbito penal, hecho este que provoca que el ciudadano quede en una situación de desconocimiento insalvable respecto a la ley y supone además un ataque directo contra los principios de legalidad y de mínima intervención que rigen el Derecho penal.

No tan grave es la situación en el Derecho administrativo. Aún así las sanciones pecuniarias que se imponen no son baladí y precisamente por ello debieran haberse redactado las normas sancionadoras con muchísimo más rigor del que se ha hecho.

Los casos jurisprudenciales que definen cuando se debe acudir a la vía administrativa o a la penal son poco concluyentes y contradictorios. A modo de ejemplo en la Sentencia del Tribunal Supremo 1316/1998, de 6 de noviembre, se considera que la tenencia doméstica de una navaja automática no entraña conducta típica penal. En sentido contrario la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza núm. 9/2001, de 16 de febrero, entiende que la mera posesión material de una navaja de 11 centímetros de hoja es por sí solo un hecho constitutivo de delito. Igualmente la A.P. de Barcelona en Sentencia de 18 de julio de 2001 condena al acusado por portar una navaja automática en la vía pública. También la A.P. de Barcelona condena en Sentencia de 13 de marzo de 2002 a un hombre por la tenencia de un mechero navaja de 5,2 centímetros de longitud, ejemplo este de la aplicación del apartado *h* del artículo 4 del Reglamento de Armas.

Para decidir qué vía seguir en cada caso debemos tener en cuenta tres criterios esenciales: si es un arma prohibida o no lo es, si es un arma de fuego o no, y si se desarrolla una actividad peligrosa o sólo existe la simple tenencia. Dependiendo de la combinación de estos tres elementos acudiremos a unas normas punitivas o a otras.

Si es un arma de fuego prohibida claramente se tratará de un delito del artículo 563 del Código Penal, independientemente de si existe una conducta de peligrosidad. Si se tratase de la tenencia ilícita de un arma de fuego reglamentaria sería un delito del 564 del Código Penal, aunque hay que matizar que si la situación de pérdida de la licencia administrativa es sobrevenida entonces no se incurre en delito. Para aquellas armas de fuego prohibidas o no cuya tenencia no sea constitutiva de delito acudiremos a al Derecho sancionador administrativo, especialmente a los artículos 155 y 156 del reglamento de Armas, o al 23 de la Ley de Protección de la Ley de Seguridad Ciudadana si la actividad no consistiera únicamente en la sola tenencia. Si el asunto se trata de un arma no de fuego prohibida acudiremos a la vía penal o a la administrativa dependiendo de si en las circunstancias de incautación del arma existía peligrosidad para la integridad de las personas. Si fuese así sería un delito del artículo 563 del Código Penal. Si no fuese así, y la tenencia no entrañaba ningún peligro real, entonces acudiremos al apartado *a* del artículo 23 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Si fuese una tenencia ilícita de un arma no de fuego no prohibida se aplicaría el artículo 157 del Reglamento de Armas.

4. LA LEGÍTIMA DEFENSA

4.1 Teoría penal

Se hace obligado el abordar la eximente penal de legítima defensa porque es un recurso habitual de exención de responsabilidad penal en muchísimos juicios en los que intervienen armas de fuego y armas blancas. Este concepto jurídico es tan importante tanto para el Derecho como para las personas de a pie porque la tenencia libre de armas de fuego para la protección personal de la propia vida y de la integridad de la vivienda familiar solamente puede ser concebida desde la perspectiva de un sólido apoyo judicial que la respalde. ¿Qué sentido tendría conseguir la aprobación legislativa de la libre tenencia de armas por parte de la población civil para la defensa de la vida y las propiedades sin cambiar al mismo tiempo las leyes que regulan esos criterios de defensa lícita? Es mucho más razonable plantearnos un escenario en el que, para la efectiva implantación de leyes favorables a las armas, se despliegue una campaña en varios frentes, pues una modificación aislada del ordenamiento no sólo no solucionará el problema sino que probablemente lo agravará. Para que podamos tener y usar apropiadamente un arma de fuego hace falta, además del requisito obvio que es que la ley permita su compra y posesión, tener la seguridad de que los Juzgados y Tribunales fallarán favorablemente a nosotros siempre que nos comportemos dentro de un marco de racionalidad.

Actualmente la legítima defensa como eximente de responsabilidad penal no sólo no está prohibida sino que es un derecho ampliamente aducido en multitud de procesos criminales. Si bien existe debate doctrinal sobre este punto entendemos que la legítima defensa es un derecho natural por cuanto consagra la protección de la vida humana misma. Matar a otra persona que ataca y pone en peligro nuestro derecho a la existencia es, sin lugar a dudas, una acción legítima y ajustada a Derecho que justifica la exclusión de la acción defensiva del ilícito penal. Según el Tribunal Supremo la legítima defensa no es otra cosa que *“la suplantación, por razón de urgencia e inaplazabilidad del propio Estado en el mantenimiento o restablecimiento del orden jurídico”*. Es decir, que el propio ciudadano, en

una situación crítica, y desamparado de la protección de la policía, se ve obligado a luchar con cualquier medio a su alcance por su propia vida.

La legítima defensa es un derecho reconocido por la ley, por los tribunales y por la doctrina jurídica, que asevera que todo hombre tiene derecho a actuar, con independencia del Estado, contra cualquier persona que agrede sus derechos patrimoniales y de honor, su vida o la vida de otras personas. De esta manera, un acción que cumpliría los requisitos objetivos del delito (disparar y matar a alguien, por ejemplo) deja de ser ilícita por cuanto está justificada y se ajusta a la ley. Así, La legítima defensa se constituye en una causa de justificación que exime de la responsabilidad penal.

Es una eximente de responsabilidad penal que puede ser completa o incompleta. Las eximentes completas son aquellas que eliminan totalmente la culpabilidad del acusado, absolviéndolo plenamente y librándolo de cualquier tipo de sentencia condenatoria. Las eximentes incompletas, o atenuantes, son aquellas que si bien mitigan la culpabilidad del acusado no lo liberan enteramente de su responsabilidad, y en consecuencia recaerá sobre él sentencia condenatoria aunque con una pena menor.

La legítima defensa como eximente completa viene recogida en el artículo 20.4 del Código Penal y estipula que:

El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurren los requisitos siguientes:

- 1. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.*
- 2. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.*
- 3. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.*

La legítima defensa como atenuante impropia, o eximente incompleta viene recogida en el artículo 21.1.1º del Código Penal cuando menciona, refiriéndose al artículo 20 C.P., “*las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos*”. Esto significa que, en caso de no concurrir los tres requisitos anteriormente expuestos, la responsabilidad penal será rebajada pero no diluida en su totalidad. De los tres requisitos mencionados el único verdaderamente preceptivo, en cuanto a que es absolutamente necesario para que se dé la legítima defensa, es el de *agresión ilegítima*. Si no existe una agresión ilegítima no podrá aplicarse la atenuante de legítima defensa, aunque concurrieren los otros dos requisitos de *racionalidad del medio empleado* y de *falta de provocación*. Esto es así porque, lógicamente,

la acción defensiva sólo puede surgir como respuesta ante un ataque previo, nunca como acción expeditiva injustificada ante una provocación.

La legítima defensa es posible respecto de todos los derechos reconocidos por la ley que sean objeto de una agresión ilegítima en los términos que expone el artículo. Mucho debate teórico ha existido acerca de cuáles derechos pueden verse amparados por la legítima defensa, y actualmente se considera que todo derecho recogido en el ordenamiento jurídico puede acogerse a la misma, incluso derechos tan abstractos como pueda ser el derecho al honor son susceptibles de ser defendidos individualmente sin incurrir en un comportamiento ilícito. Sin embargo, los bienes patrimoniales que se protejan deben ser personales pues no es posible aplicar esta eximente en la defensa de bienes comunitarios.

Respecto de la agresión existen determinados requisitos. El primero es el de la existencia de una agresión ilegítima que justifique la reacción de defensa. Esa acción defensiva ha de ser objetiva en cuanto a que debe contraponerse a una agresión real pues no bastará con la mera amenaza. Ha de ser también una defensa contra actos humanos pues en cualquier otro tipo de hechos estaríamos ante un estado de necesidad. El ataque ha de ser injustificado o ilegítimo, esto es carente de razón ni fundamento jurídico y eminentemente inesperado. El ataque debe ser también actual e inminente pues no cabe la defensa contra agresiones pasadas, aunque sí está tolerada la defensa contra agresiones futuras en la medida en que se realice cuando se reciba el ataque y se adecúe a criterios de necesidad y proporción.

Respecto de la defensa. Debe existir un ánimo de defenderse así como una necesidad racional del medio empleado. La necesidad de racionalidad del medio significa que no puede existir otra posibilidad que no sea recurrir a un método lesivo. Es interesante aquí hablar sobre la posibilidad de retirada o huida ante el ataque. El Supremo sienta cátedra al respecto estableciendo que la fuga no es exigible de forma ordinaria, y que para que así sea se deben cumplir dos requisitos: que el intentar la fuga no ponga en riesgo a la víctima, y que la huida se pueda dar en condiciones no vergonzantes. Esta idea planteada ante nuestros tribunales patrios no es una duda moderna sino que ya se ha abordado con anterioridad en otros países. En modelos judiciales anglosajones existe un concepto denominado "*Castle Doctrine*" (Doctrina del Castillo), el cual proviene de la expresión británica "*a man's home is his castle*" (el hogar de un hombre es su castillo). Según esta concepción, cuando un hombre se encuentra en lugares tales como su casa, su trabajo, o incluso en su coche, y es agredido, tiene el derecho a responder con el uso de la fuerza letal para defender su vida y la propiedad que se ve invadida, y no tiene ningún tipo de obligación de huir o retroceder, más al contrario está legitimado a matar al agresor. En tales casos el homicidio sería justificado y el sujeto sería im procesable. Ello desde la perspectiva del Derecho anglosajón, por supuesto, no desde el prisma jurídico de un modelo continental europeo como el español. Aún así existe un cierto grado de paralelismo entre ambas doctrinas judiciales, aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España no llegue a los extremos antes referidos.

Otro requisito es que no haya habido un grado de provocación suficiente por parte de la víctima que desate la agresión. El criterio para definir lo que es provocación suficiente es “la provocación que a la mayor parte de las personas hubiere determinado a una reacción agresiva”. Si ha habido provocación suficiente o ésta ha sido culposa (se podía prever un ataque inminente) la eximente de legítima defensa será incompleta. Si ha habido una provocación intencional por parte del agredido no existirá eximente por ser el defensor, en realidad, un agresor de hecho.

4.2 Proporcionalidad

Aunque en la legítima defensa el bien jurídico que se daña no tiene por qué ser proporcional al bien que se protege, sí que es necesario que exista una cierta proporcionalidad racional en el medio empleado. Así, el método utilizado para defenderse de la agresión debe ser proporcional al nivel de amenaza creado por el agresor.

La necesidad racional del medio empleado, recogida en el artículo 20.4 del Código Penal, supone que no se pueda utilizar un medio no lesivo, es decir, que no quede más remedio de actuar de esa determinada manera. La racionalidad del medio se definirá *“en función no tanto de la semejanza material de las armas o instrumentos utilizados, sino de la situación personal y afectiva, en la que los contendientes se encuentran”* de manera que sea posible desarrollar *“una defensa adecuada a la entidad del ataque, la gravedad del bien jurídico en peligro y la propia naturaleza humana”*. Como se puede observar la propia magistratura entiende que el concepto de racionalidad en el medio empleado para la legítima defensa no se debe fundamentar en un criterio material del objeto utilizado sino que debe regirse por el marco situacional y personal en términos subjetivos del defensor. Así se recoge en STS 1595/2001.

Racionalidad del medio no implica proporcionalidad. Lo que debe valorarse es el estado anímico del sujeto *ex ante* para afrontar la situación de agresión. Si bien no se somete el medio empleado a una graduación fija y objetiva, no por ello deja de ser un elemento más a tener en cuenta para decidir si ha existido racionalidad sobre el mismo. El concepto de proporcionalidad, referido a un supuesto de legítima defensa, se gradúa en función de *“las posibilidades reales de una defensa adecuada a la entidad del ataque, la gravedad del bien jurídico en peligro y la propia naturaleza humana”*, pero en ningún caso debe calibrarse utilizando únicamente como baremo al arma u objeto material empleado.

De todo ello se extrae que en una acción de legítima de defensa en la que se reaccione utilizando, por ejemplo, un arma de fuego contra un arma no de fuego, no por ello existirá

necesariamente irracionalidad en el medio empleado, pues incluso a pesar de la desproporcionalidad de los medios materiales puede aún así existir proporcionalidad psicológica y colmarse el requisito de la eximente completa. Ello es del todo lógico y racional en base a que la situación de desproporcionalidad no la crea la víctima que se defiende sino el agresor que la ataca. La reacción natural de defensa ante una situación de peligro es acudir a los medios u objetos de los que se disponga independientemente de aquellos que utilice el agresor, pues el fin último es conservar la integridad personal o patrimonial independientemente del modo, en virtud de una situación de amenaza sobrevenida e inesperada. Es por ello que es perfectamente legítimo utilizar un arma de fuego defensivamente con independencia del arma u objeto que utilice el agresor. Es, en definitiva, el ejercicio del derecho de defensa instintiva encaminada a la autoconservación.

5. APROXIMACIÓN CRIMINOLÓGICA

5.1 Situación social

Yo creo que cada nación, al igual que cada persona, tiene su propio destino dentro de la historia universal, y una identidad característica que la define. La española es una nación que ha perdido el norte en el periplo de la historia y se ha quedado varada fuera del sendero. Consecuentemente, tenemos una sociedad eminentemente acomplexada, estereotipada y rígida, en el sentido de que se fijan como correctas una serie de ideas y cualquier comportamiento que se salga de ahí es rápidamente reprimido a través del reproche social y el escarnio público. Las leyes actuales en materia de armas vienen marcadas por la presión social de una ideología determinada que aglomera un gran número de corrientes políticas, y aunque las opiniones favorables al control de armas suelen estar basadas en criterios subjetivos no por ello dejan de tener un elevado peso electoral, y así queda reflejado en nuestro opresivo ordenamiento jurídico.

Las armas en general y las armas de fuego en particular son elementos muy mal vistos por la sociedad y que, con el paso de los años, se han ido convirtiendo en un tema tabú. Los políticos políticamente correctos mantienen una postura oficial de confrontación con respecto a la tenencia y porte de armas sin basarse en razones objetivas ni en un análisis intelectual profundo del asunto. Esta posición con respecto al tema de las armas se alinea dentro de una serie de movimientos de ideología pacifista que han tenido una gran aceptación en amplios sectores de las sociedades modernas. Más allá del debate ideológico o filosófico al respecto, la realidad innegable es que buena parte de la población española desprecia visceralmente todo lo relacionado con las armas. Aunque en un principio las ideas vertidas por esta corriente ideológica pudieran ser honestas, la chocante realidad de los hechos demuestra que la española es una sociedad extremadamente violenta, tanto física como verbalmente, con respecto a otras naciones de nuestro entorno socioeconómico. Resulta cuanto menos contradictorio que seamos una nación con un fuerte discurso buenista y pacifista pero a la vez tengamos una de las tasas de criminalidad más alta de la Unión Europea.

Subconscientemente cualquier mención a las armas se asocia rápidamente con ideas como guerra, asesinato, violencia y muerte. Precisamente por eso las asociaciones y clubes relacionados con el mundo de las armas tienen tan poca proyección en la esfera pública y sus actividades suelen quedar desterradas al anonimato más absoluto. La sociedad de forma general no quiere saber nada del mundo de las armas. Esto es doblemente hipócrita en la medida en que las armas mantienen el orden y aseguran la paz social a través de su uso por

parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en que los españoles somos un pueblo beligerante y tendente a los conflictos.

A pesar de todo ello las armas están fuertemente arraigadas en la tradición popular y en la esencia de la nación. Especial prominencia tienen las armas blancas, concretamente las navajas, que han sido trágicas protagonistas de innumerables escaramuzas callejeras, pues han acompañado siempre a figuras tan emblemáticas del folclore español como bandoleros, guerrilleros y aventureros varios.

Las armas de fuego despiertan un miedo atávico en el subconsciente colectivo porque representan lo más destructivo de la naturaleza humana. Se asocian rápidamente al crimen y la delincuencia. Muchos sostienen que las armas incitan la violencia ¿Es objetivamente cierta esta afirmación? Una relación tan estrecha entre armas y crimen debe ser analizada más en profundidad.

5.2 Datos

Los datos en España respecto a muertes y delitos relacionados con las armas de fuego son muy escasos, principalmente por el hecho de que no hay ninguna institución que los recoja a nivel nacional. Aún así que existen algunas cifras sociológicas que nos pueden indicar la repercusión que tienen las armas en la sociedad.

Por poner un ejemplo, los asesinatos y homicidios dolosos rondan los mil casos anuales en España. Un ejemplo de la tendencia lo refleja esta gráfica:

AÑO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
HOMICIDIOS	1076	1102	1192	1234	1295	1300	1240	1274
ASESINATOS								

La gran mayoría se cometen con armas blancas u otra serie de objetos, y muy pocos se realizan utilizando armas de fuego, quizá por la dificultad que tiene la mayoría de la población para acceder a ellas. La tasa media de homicidios en España hace diez años se situaba en 3,3 personas por cada 100.000 habitantes y tristemente era la más alta de todos los países de la Unión Europea. Actualmente esa tendencia se ha reducido considerablemente hasta llegar una relación de 0,96 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual nos sitúa

como uno de los países europeos con menor tasa de criminalidad homicida. Observamos que las fuertes fluctuaciones de las cifras de homicidios en los últimos 15 años no obedecen a las normas de control de armas, pues las estrictas leyes españolas en la materia se han mantenido inalteradas durante el citado período. Es un hecho que España posee una de las legislaciones en materia de control de armas más restrictivas del mundo y a pesar de ello las estadísticas criminológicas parecen seguir un patrón desligado de la rigidez normativa. A priori no es consecuente que existiendo una limitación tan acuciada en la tenencia de armas por civiles se den tasas de crímenes violentos tan elevadas. No existe una demostración objetiva de que a través del control de las armas de fuego se pueda reducir la criminalidad, ya que siendo España el país europeo más restrictivo en la materia ha ostentado durante varios años el número uno en índice de homicidios de la Unión Europea.

En 2010 se cometieron en nuestro país un total 263.816 delitos de toda índole, de los cuales apenas 800 estaban relacionados con tenencia ilícita de armas o explosivos. De media se cometen 11 delitos al día en España en los que intervienen armas de fuego, concretamente el 8% de los robos con violencia e intimidación, el 26% de los homicidios y el 1% de las violaciones. De los delitos violentos en los que se utilizaron armas de fuego tan sólo el 1% se corresponde con armas legales y guiadas adecuadamente, el resto, el 99% se perpetraron utilizando armas ilegales obtenidas del mercado negro. Un mercado negro poco controlado que permite obtener un revólver cargado por tan sólo 300 euros. La conclusión es que los actos delictivos se cometen independientemente del hecho de que se tengan o no armas y que, si bien se controla con bastante diligencia la tenencia legal de armas, el mercado negro de las mismas no está en absoluto controlado. Por otro lado, un criminal jamás usará un arma registrada legalmente porque son fácilmente rastreables; por el contrario, intentará usar armas sin registrar que sólo se pueden conseguir ilegalmente. Luego la tenencia legal de armas de fuego no sólo no aumenta la criminalidad (los propietarios de las mismas son muy poco proclives a la delincuencia) sino que ayudaría enormemente a combatirla en la medida en que supondría llevar un control exhaustivo de todas las armas en circulación. Mientras más armas sean legales y estén registradas por las autoridades menos posibilidad tendrá el criminal de usarlas con impunidad. Un arma legal no se puede utilizar en el crimen organizado.

Los propietarios legales de armas de fuego no son delincuentes y aún así se les asfixia administrativa y legalmente. Son las armas "fantasma" las que se emplean en la comisión de los delitos y precisamente por ello un criminal nunca querrá registrarse como propietario legal de armas de fuego. Es por este motivo que la teoría del control del crimen a través de la limitación de tenencia legal de armas de fuego es a todas luces ineficaz.

Ahora bien, lo que sí que es innegable es el hecho de que el fácil acceso a armas de fuego podría suponer una mayor facilidad para cometer actos violentos pasionales y momentáneos, de forma que con un arma de fuego la letalidad del mismo aumentaría drásticamente. No es

lo mismo enfadarse en una reyerta y asestar un puñetazo que sacar la pistola y pegar un tiro. Veamos un ejemplo de ello en la tasa de suicidios anuales.

	Total	Arma de fuego explosivos	Arma blanca	Envenenamiento	Ahorcamiento, estrangulación, etc	Precipitándose de alturas
Total						
Ambos sexos	2.017	123	60	199	870	486
Varón	1.480	121	43	104	735	301
Mujer	537	2	17	95	135	185
Consumado						
Ambos sexos	1.806	118	35	124	854	454
Varón	1.388	116	28	78	728	290
Mujer	418	2	7	46	126	164
Tentativa						
Ambos sexos	211	5	25	75	16	32
Varón	92	5	15	26	7	11
Mujer	119	0	10	49	9	21

Aproximadamente, del total anual de suicidios el 5% se cometen utilizando armas de fuego o explosivos. Una importante corriente criminológica defiende la viabilidad de la anticipación preventiva a los delitos y actos violentos a través de lo que se denomina "prevención situacional", esto la reducción de oportunidad para cometer el delito limitando los factores exógenos al agresor. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el caso de los suicidios en Gran Bretaña utilizando el gas doméstico de la vivienda. Para atajar el problema se sustituyó el gas original que era tóxico por otro inócuo y se consiguió reducir el número de suicidios en un 35%. De igual manera en Austria, tras reducir las armas de fuego en circulación, se experimentó una notable reducción de los suicidios. Pero no sólo eso, también se puede limitar el número de accidentes mortales con armas de fuego. La idea es controlar al hipotético delincuente a través del control y restricción de los medios que emplearía para sus actividades. Es evidente que muchos suicidios y crímenes se cometen en arrebatos pasionales pasajeros en los que se tiene un arma de fuego al alcance de la mano. En España, sin embargo, las cifras de suicidios con armas de fuego no son lo suficientemente

significativas como para poder afirmar que la gente se suicida porque tiene un arma al alcance. La realidad es que el suicida convencido acometerá el acto autolítico con cualquier medio a su disposición.

5.3 Incidencia en otros países

Si tenemos que empezar por un lugar del mundo lo mejor es hacerlo directamente por los Estados Unidos de América. Dentro del mundo occidental constituyen una rareza en cuanto a cultura, ideología e idiosincrasia social. Son la primera potencia mundial pero a la vez tienen innumerables claroscuros, tanto a nivel económico y social como en cifras criminalísticas. Son un pueblo que de manera natural está ligados a las armas, quizá porque se rebelaron del dominio británico de forma violenta y han conseguido la libertad de la que ahora disfrutan pagando un elevado precio en sangre. Hay una frase que resume las diferencias entre Europa y los Estados Unidos que reza que "en Europa se busca la calidad de vida mientras que en Estados Unidos se busca un estilo de vida".

La sacrosanta Constitución estadounidense consagra en la afamada Segunda Enmienda el derecho de todo norteamericano a tener y portar armas:

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

"Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas."

Conceptualmente la tenencia de armas está intrínsecamente ligada a la defensa de la libertad política y los derechos colectivos del pueblo. Los objetivos perseguidos en esta norma jurídica son:

- Proteger el derecho natural que todo hombre tiene a defender personalmente su libertad, su vida, su familia y sus propiedades.
- Tener la capacidad de organizar milicias armadas compuestas por civiles que fuesen eficaces en la lucha armada para defender la integridad de la nación.
- Repeler popularmente invasiones extranjeras.
- Defenderse de cualquier posible gobierno antidemocrático, tiránico o que amenace los derechos y libertades del pueblo americano.

-Participar activamente en la defensa y aplicación de la justicia.

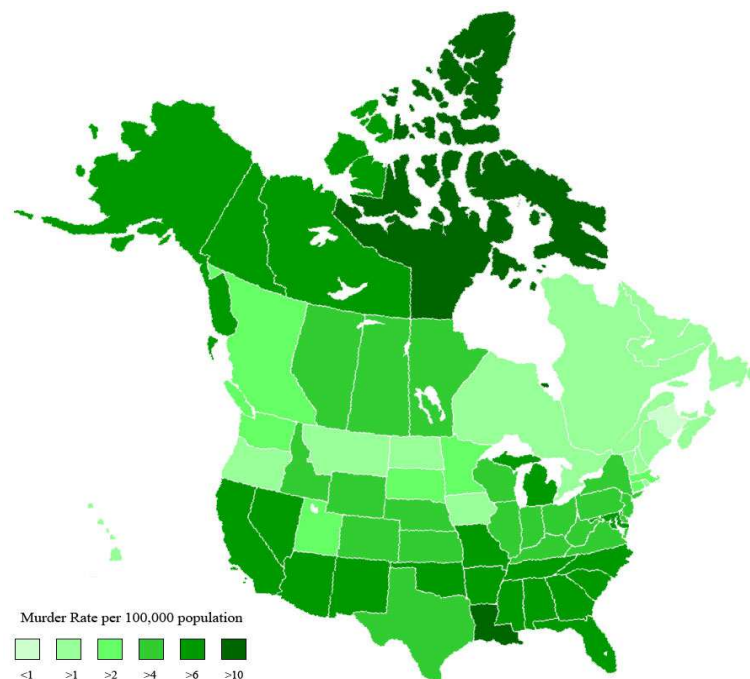
- Tener, en definitiva, un medio para conseguir la efectiva autonomía personal.

Cabe mencionar que cada estado americano dispone de sus propias leyes que regulan la tenencia, porte y uso de armas de fuego. Podemos encontrar estados en los que se puede pasear por la calle con una pistola colgada del cinturón y otros en los que ni siquiera se pueden portar armas de fuego en espacios públicos. Independientemente del grado de restricción, todos y cada uno de esos estados defiende el libre derecho a la compra y tenencia de armas de fuego ya que así viene establecido en su Constitución federal. Esta realidad jurídica ha forjado una nación armada en la que circulan bastante más de 200 millones de armas de fuego, hasta tal punto que hay unas 90 armas de fuego por cada 100 americanos.

El lado oscuro de esta historia lo constituyen las cifras de muertes por arma de fuego que se producen cada año en los Estados Unidos. Se cometen alrededor de 16.000 homicidios al año, de los cuales el 67% (más de 10.000) son perpetrados utilizando un arma de fuego. Incluso en los suicidios se utilizan de forma sistemática, estando las armas de fuego presentes en más del 50% de los casos, cifra que contrasta bastante con la de España (solamente el 5% de los suicidios se cometen con armas de fuego). Aunque ciertamente hay que señalar que el hecho de que tantos suicidios se cometan con armas de fuego parece ser más una cuestión accidental, coyuntural de la sociedad americana, antes que un elemento desencadenante del suicidio mismo. Esto se deduce de que en otros países occidentales, con ratios de suicidios más elevados que el americano, no se emplean apenas las armas de fuego. Pero la sangría aún aumenta más si a todo esto le añadimos los 1.500 muertos anuales de accidentes con armas de fuego. En total, mueren al día una media de 80 estadounidenses por eventos relacionados con las armas de fuego.



La criminalidad homicida se distribuye territorialmente de la siguiente manera:

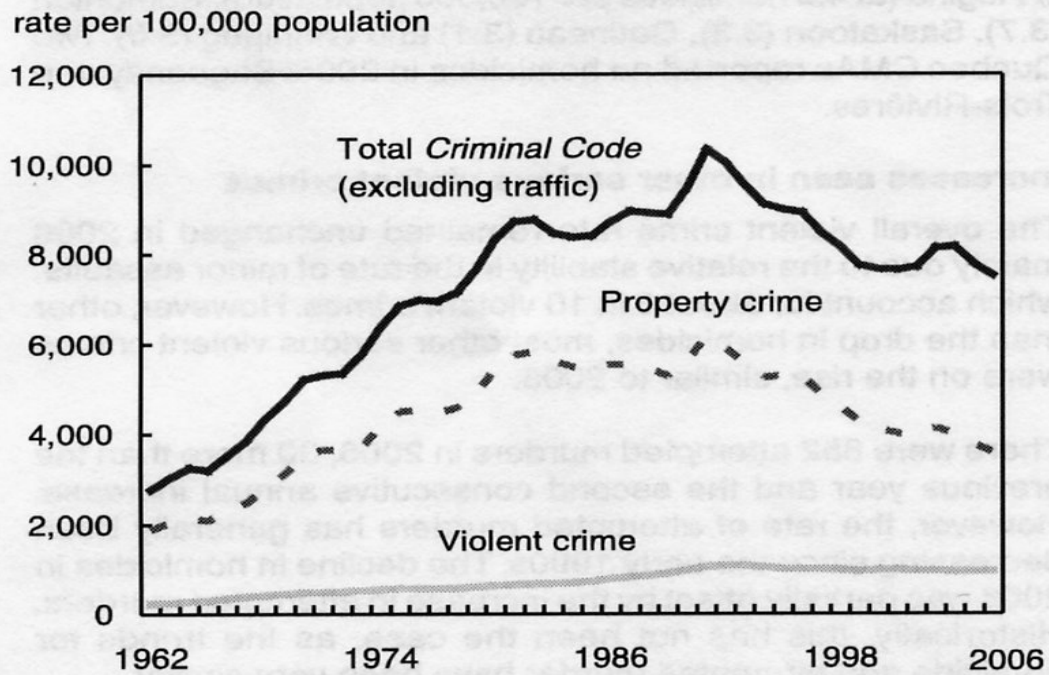


Los hechos son que la estadounidense es una sociedad extremadamente violenta para los parámetros occidentales, que además tiene una cultura armamentística muy arraigada y sus ideas vitales y morales difieren bastante del paradigma europeo. Sufren una lacra social consistente en una excesiva violencia que se filtra a todos los niveles de la sociedad. Los parámetros de homicidios no son aceptables para un país civilizado del primer mundo. Aún así, es revelador comprobar cómo en los últimos años una gran cantidad de estados americanos han modificado sus legislaciones para liberalizar la tenencia y uso de armas de fuego, y paralelamente los índices de criminalidad han caído desde una tasa de 10,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991 a la mitad en el año en curso, gracias a las políticas de libre tenencia de armas de fuego.

Hay que decir que a pesar de todo ello el pueblo americano ama la libertad, y están dispuestos a defenderla con un celo pasional. Son personas "salvajes" cuya tolerancia a la violencia es mayor que la del resto de occidentales, pero también tienen un profundo y casi religioso respeto a la democracia. No olvidemos que gracias a los sacrificios del pueblo americano en Europa hoy en día no se habla alemán.

Nuestro siguiente sujeto, el vecino del norte de los estadounidenses, Canadá, es otro caso particular que debemos analizar porque son uno de los países del mundo con más armas por habitante y a la vez disfrutan de unas reducidísimas tasas de criminalidad. Tienen una gran cantidad de armas de fuego y culturalmente las aceptan de forma bastante extendida. En la última década, sin embargo, se ha venido produciendo un endurecimiento respecto a las leyes de armas y un cierto rechazo social a las armas en sí. El punto de inflexión ha sido probablemente el asesinato en 1989 en la Universidad de Montreal de 14 mujeres, a partir del cual se restringió significativamente el acceso a las armas de fuego.

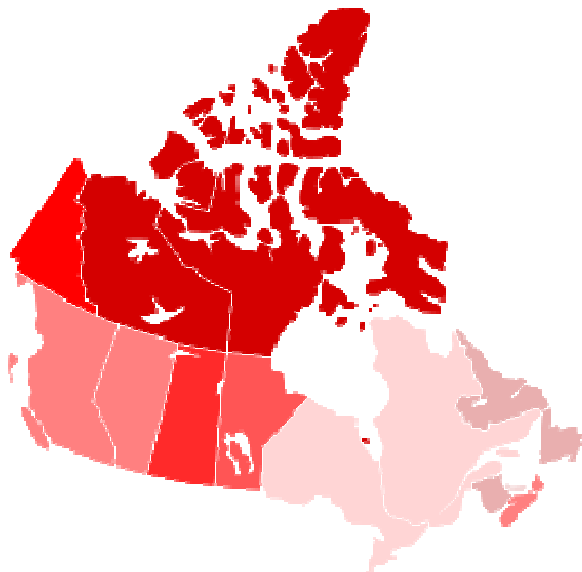
Crime rates, Canada, 1962 to 2006



Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Uniform Crime Reporting Survey.

Desde que se impusieron las restricciones en materia de armas los cr menes violentos descendieron en buena medida. Todo parece indicar que las limitaciones a las armas tuvieron un efecto positivo en la delincuencia a corto plazo. No se puede afirmar con rotundidad porque no existe ning n estudio oficial que relacione las tasas de criminalidad en Canad  con las leyes en materia de armas, y hay que tener en cuenta que en las actividades delictivas intervienen infinitud de factores.

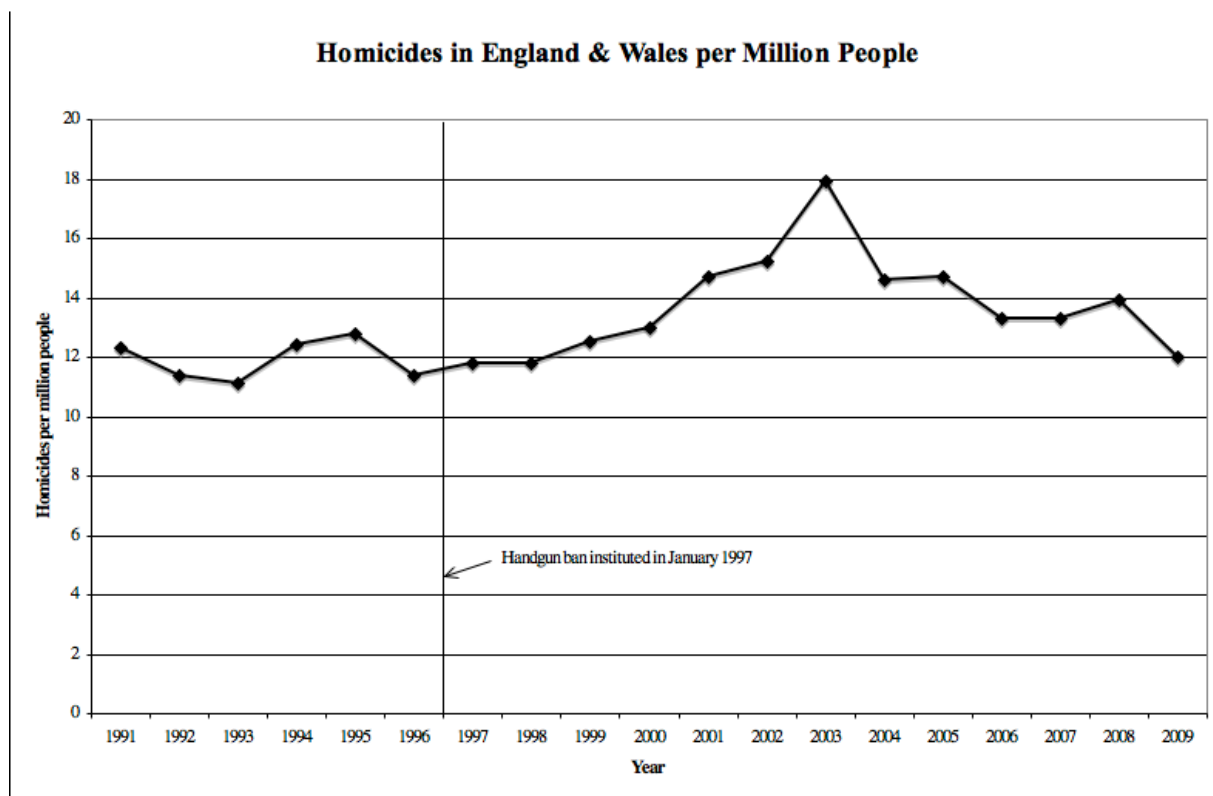
La criminalidad se distribuye geogr ficamente:



En Canadá existen entre 2 y 4.5 millones de propietarios legales de armas. Del total de delitos violentos en los que se usaron armas de fuego menos del 1% fue acometido por propietarios legítimos o por armas legales. Al igual que sucede el resto de países occidentales los crímenes con armas de fuego son llevados a cabo con armas no registradas y por tenedores ilegítimos de las mismas.

A partir de la campaña de control de armas también se experimentó una notable reducción del número de suicidios con armas de fuego que pasó de 1287 en el año 1978 a tan sólo 568 en 2004. Por el contrario, el número de suicidios sin armas de fuego aumentó de 2.046 en el año 1977 a la cifra de 3.116 en el año 2003, es decir, que el número total de suicidios aumentó en términos netos. Se puede concluir que la política de control y reducción de armas bajó el número de suicidios con armas de fuego pero en ningún caso tuvo efecto alguno en el número total de suicidios.

Si cruzamos el Atlántico nos topamos con la brumosa Albión. Históricamente Gran Bretaña ha sido un país que ha disfrutado de una rica tradición armamentística y en consecuencia tenían leyes relativamente permisivas. Sin embargo todo ello cambió radicalmente a raíz de una serie casos de asesinatos en masa que se sucedieron en pocos años. Casos como el de Michael Ryan, que en 1987 mató a 16 personas, hirió a 14 y luego se suicidó, o el de Thomas Hamilton que asesinó a 16 niños en un colegio en 1996. Todos estos crímenes se cometieron utilizando armas de fuego. A raíz de casos como estos se modificó en el año 1997 el Acta sobre Armas de Fuego y se impuso un férreo control sobre la tenencia de armas de fuego. Con ello se esperaba reducir el crimen.



A partir de 1996, precisamente cuando se prohíbe la tenencia de armas de fuego cortas en la población civil, no sólo no se reducen los homicidios sino que de hecho aumentan significativamente. Al igual que en otros países, según datos del Ministerio de Interior británico, tan sólo una de cada diez armas de fuego utilizadas en hechos delictivos estaba registrada legalmente. Vemos como en Inglaterra las medidas de control de armas de fuego no tuvieron efecto alguno sobre las tasas de homicidios, luego concluimos que aquí, al igual que en otros países, se observa que las armas no son un factor determinante en los índices de criminalidad, los cuales parecen regirse por factores sociales, culturales y económicos que nada tienen que ver con la propiedad legal de armas de fuego.

Otro país que aunque europeo no pertenece a la Unión Europea es Suiza. Según un lema de los propios suizos *"Suiza no tiene ejército, Suiza es un ejército"*. Tienen un sistema de milicias movilizables en las que cada ciudadano participa activamente de la defensa de la nación. Después de la instrucción militar pueden llevarse las armas a sus casas. El 34% de los suizos poseen armas de fuego, lo que en una población de 7 millones de habitantes significa que hay unos 3 millones de propietarios de armas de fuego. La política de Suiza en materias de armas no tiene parangón en Europa y hasta tal punto defienden ese derecho que en el año 2011 se hizo un referéndum nacional en el que se aprobó por una mayoría absoluta de casi el 60% seguir manteniendo su modelo de libre tenencia de armas de fuego. Suiza, a pesar de que sus ciudadanos están profusamente armados, tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, con tan solo 53 homicidios durante el 2010. Aquí se

demuestra como la inclinación al delito de una sociedad nada tiene que ver con el hecho de que esta comunidad esté armada o no. El pacífico pueblo suizo entiende que son precisamente las armas las que aseguran su libertad y su bienestar social.

Otros países como Francia poseen normativas mucho más permisivas que la nuestra en cuanto a la tenencia de armas de fuego y aún así tienen índices de criminalidad homicida más bajos que los nuestros. En Francia todo ciudadano tiene el derecho a tener armas de fuego para la autodefensa. En Alemania pueden incluso portar el arma fuera del domicilio y en Italia se pueden obtener armas de fuego cortas para defender la integridad física y las propiedades inmobiliarias.

Como podemos observar en todos estos países las leyes en materia de posesión de armas de fuego son más laxas que en España. No por ello sus tasas de homicidios son más elevadas. Al contrario, España, siendo un país tremendamente restrictivo en esta materia, tiene un índice de asesinatos más alto de lo que cabría esperar. Por tanto podemos deducir que el excesivo control en la posibilidad de tener armas de fuego no es una medida que tenga un efecto importante sobre la delincuencia y los homicidios. Prohibir la tenencia de armas de fuego no sólo no reduce la criminalidad sino que puede llegar a aumentarla, como en el caso de Inglaterra, donde desde que se prohibió la tenencia de armas de fuego cortas los homicidios y asesinatos han aumentado un 40%.

La relación causal entre la prohibición de tener armas de fuego y la pretendida reducción de la criminalidad es inexistente. Ahogar jurídicamente a los propietarios legales de armas no aporta ninguna utilidad al estado por cuanto son un colectivo que no participa del crimen.

5.4 Relación entre armas y delitos violentos

De lo anteriormente expuesto se deduce que no parece existir una relación causal entre la tenencia de armas por parte de la población civil y los índices de criminalidad. La actividad delictiva es ajena al hecho de que las armas de fuego sean legales o no. La población civil que adquiere legalmente armas de fuego tiene tasas de criminalidad muy bajas, incluso por debajo de la media de la sociedad, y no usarán sus armas para acometer delitos. Para mayor abundamiento mencionar que no es adecuado utilizar un arma legal, y por lo tanto fichada y registrada, en la comisión de delitos. Es por este motivo que independientemente del número de licencias de armas que se concedan no por ello aumentarán los delitos violentos y mucho menos el empleo de armas de fuego en los mismos.

Precisamente en España, a pesar del riguroso control normativo sobre las armas de fuego, tenemos una tasa de criminalidad excesivamente elevada. En otros países del ámbito

europeo, con legislaciones mucho más permisivas al respecto tienen tasas de criminalidad más reducidas. Si bien es cierto que la reducción del número de armas pudiera disminuir el número de muertes violentas no lo haría en una cifra significativa, ya que desde luego el factor que marca el índice de criminalidad de una sociedad no parece ser la tenencia de armas de fuego.

Es verdad que una reducción en la tenencia de armas puede rebajar el riesgo situacional de conflictos violentos y reducir los números netos de homicidios, asesinatos, suicidios y accidentes con resultados mortales. Es innegable que las armas de fuego son un elemento esencialmente violento que facilitan actos de esa índole.

Podemos afirmar que las armas de fuego en la población civil están implicadas en un porcentaje, mayor o menor según el caso, de crímenes y actos violentos, los cuales, sin la mediación de armas, o directamente nunca su hubieran producido o en caso de producirse su gravedad y letalidad habrían sido considerablemente menores. Sin embargo, las cifras de esos sucesos en los que intervienen armas de fuego son muy bajas y solamente representan una pequeña cantidad del cómputo global. La tenencia legal de armas de fuego no afecta a las tasas de criminalidad. La cantidad de delitos de una sociedad cualquiera está determinada por una serie de factores sociológicos exógenos a las armas de fuego. La iniciativa para la actividad delictiva es independiente de la existencia de las armas. Afirmino objetivamente que el derecho a la propiedad de armas de fuego no fomenta la criminalidad.

6. CONCLUSIONES

¿Por qué deberíamos tener armas de fuego? Esa es la pregunta a la que hemos tratado de dar una respuesta. Pero más importante aún, ¿verdaderamente existe un derecho individual a poseer armas?

Sobre la primera cuestión se puede hablar largo y tendido. Del acercamiento criminológico a la materia deducimos que no existe una relación causal clara entre la libre tenencia de armas de fuego y las cifras de homicidios dolosos y asesinatos, y desde luego tampoco de suicidios. Es un error político de suma gravedad anteponer los inconvenientes particulares al interés general, porque los beneficios a la sociedad en conjunto superan con creces los riesgos inherentes.

Hemos podido ver como las medidas de control de armas no reducen la criminalidad, incluso a veces el tiro puede salir por la culata como sucedió en Gran Bretaña donde, al prohibirse la libre tenencia de armas de fuego, no sólo no se consiguió apaciguar la actividad criminal sino que casi se llega a duplicar en una década. Las leyes restrictivas surgen de la reacción emocional subjetiva ante unos hechos traumáticos, cuando más bien debiera ordenarse la legislación al interés general adoptando decisiones fruto de una ponderación fría y racional de la realidad.

Esas normas tan opresivas atacan en última instancia a los ciudadanos honestos que sí que cumplen con la ley. Esos mismos que poseen armas legalmente y que si el Estado ordena su control o retirada obedecen mansamente porque creen en la legitimidad del sistema de justicia y en el mantenimiento de la paz social. Pero son los que muestran un abyecto desprecio a la justicia quienes no se verán afectados por el control armamentístico. Los datos estadísticos muestran que los criminales no utilizan armas legales en sus correrías por ser fácilmente rastreables. Debiera el legislador más bien preocuparse por controlar el mercado negro antes que dirigir purgas infructuosas contra los buenos ciudadanos. ¿De verdad nuestra casta política piensa que prohibiendo las armas los delincuentes dejarán de utilizarlas? Si muestran un elemental odio hacia los derechos más elevados y sagrados como son la vida y la propiedad familiar, ¿qué ley de armas no estarían dispuestos a violar? Hasta en los países donde las leyes son más permisivas y conseguir armas de fuego es relativamente fácil, los crímenes se siguen cometiendo con armas ilegales no registradas. Es precisamente por eso que privar a las personas honestas de sus armas es, literalmente, dejarlos indefensos contra aquellos que sí que las poseen de manera ilegal.

Todas estas medidas de prevención situacional no son eficaces en la medida en que no atajan el problema de raíz, puesto que el crimen es un acto surgido de la voluntad del ser humano mientras que las armas son un mero instrumento. Eliminando el medio original el criminal simplemente lo sustituirá por otro que le sirva para obtener los mismos fines.

No es consecuente que un Estado que posee una lucrativa y pujante industria armamentística nos prohíba a los ciudadanos el derecho a tener armas de fuego. Es hipócrita que ese mismo Estado que emplea a policías armados para mantener el orden a través de la violencia nos diga que las armas son malas. Las armas no son malas por sí solas, y el matiz que nunca se mencionan es que, en realidad, las armas solamente son malas cuando están en manos del pueblo.

Por todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que:

1. En España existe una normativa muy restrictiva en materia de armas. La tenencia de armas en sí no es un derecho en el ordenamiento jurídico español sino que se asocia con la práctica del tiro deportivo, la caza, y, en muy escasas y justificadas ocasiones, con la necesidad de defender la propia vida por peligrar ésta.
2. Las leyes, tanto penales como administrativas, que regulan el régimen sancionador y punitivo son poco claras y tremendamente contradictorias.
3. La técnica de la ley en blanco empleada en el delito de tenencia ilícita de armas de fuego es poco acertada y crea inseguridad jurídica. Es intolerable que los supuestos de hecho penales estén poco definidos en materia de armas y que existan sentencias opuestas entre sí.
4. La legítima defensa con armas de fuego como eximente de responsabilidad penal es aplicada habitualmente, aunque los criterios pueden ser excesivamente rígidos y demasiadas veces la víctima acaba siendo procesada y condenada.
5. No existe una relación causal entre las leyes de control de armas de fuego y la disminución de la criminalidad.
6. Al contrario, la libre tenencia de armas ayuda a crear una sociedad más segura y puede llegar a reducir los índices de criminalidad.
7. Las armas son las garantes de la libertad tanto colectiva como individual.
8. Un pueblo desarmado es fácilmente controlable.
9. Los individuos tenemos derecho a defender, con nuestros propios medios, nuestra vida y nuestro patrimonio.

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos; que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar seguridad y felicidad.

Fragmento de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776

Esas palabras no son el eco lejano de un pasado histórico, esas frases constituyen la declaración más contundente de que la legitimidad de una nación no reside en su gobierno sino en la voluntad de sus ciudadanos. Los gobiernos cambian, caen y otros nuevos se alzan en su lugar; unos son más justos otros los son menos. La ley justa está siempre por encima de los gobiernos pues estos existen para asegurar que las personas puedan cubrir sus necesidades espirituales y materiales; si no es así, tenemos al derecho a rebelarnos. Ya dijo Lafayette que *“cuando un gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es, para la nación y para el individuo, el más sagrado de los derechos y un deber indispensable”*.

No quiero que otros lo hagan todo por mí. No quiero ser un ciudadano más al que haya que tutelar desde las Administraciones Públicas. No necesito que con la excusa de protegerme me pongan una venda los ojos y me aten de pies y manos. Todos los hombres nacemos libres por naturaleza; ésa es una verdad innegable. Si nos arrebatan las armas que aseguran esa libertad entonces se llevan con ellas la esencia misma de la libertad.

¿Cómo aceptar un discurso pacifista que promueve la demonización de personas como yo y otros muchos, que amamos las armas? ¿Cómo tolerar que un colectivo social sin vocación cívica ni voluntad de sacrificio por la nación nos arrebatase un derecho tan elemental como es la propiedad de las armas? Lo que está en juego no es una cuestión simplemente jurídica sobre la propiedad de un pedazo de metal, lo que nos estamos jugando aquí es la esencia misma de la vida. Es un choque entre dos formas de ver la existencia humana: una aboga por reducir la independencia y la autonomía de los hombres, abocándonos a la filosofía del miedo y la degeneración del espíritu emprendedor; la otra, la nuestra, entiende que una vida sin libertad no merece la pena ser vivida y que sólo a través de la independencia individual se puede alcanzar la felicidad. Poco a poco nos han ido arrebatando las cosas que verdaderamente importan: primero fueron las armas, luego nos prohibieron acampar en los bosques y en los montes, nos pidieron impuestos por cazar y pescar, nos exigieron obediencia a leyes injustas que protegen al criminal frente al padre de familia, y finalmente nos amordazan la boca con las tenazas de la culpabilidad. Yo no me siento culpable por defender mi derecho a las armas de fuego, debería sentirse culpable el tirano que me obliga a

entregarlas. No me siento culpable por proteger mi hogar y a mi familia, el culpable es el criminal que traspasa el umbral de mi casa. No soy culpable de nada, culpable es el banco que deja en la calle a una familia, culpable es el político que roba el dinero del pueblo y nos sacrifica al interés del mercado, culpable es el terrorista que mata de un tiro en la nuca a un civil desarmado. Si de algo soy culpable es de contemplar impasible como se muere mi España querida, soy culpable de ser uno más en una sociedad sin principios, corrompida moralmente y sobornada con las dádivas del materialismo. Me causa gran dolor pensar que una nación tan grande como la nuestra, que le ha dado a la humanidad tantos y tan buenos hombres, que ha conquistado un mundo y sembrado las semillas de la civilización en un continente entero, se haya avenido a un final tan triste e indigno. ¿En qué momento perdió el pueblo español la voluntad de luchar y el coraje para plantar cara?

No son las armas lo que nos quitan, es nuestra individualidad, es nuestra libertad de pensamiento, es nuestra independencia del poder del estado, es, en definitiva, nuestra hombría lo que nos arrebatan. Las armas de fuego son el medio que utilizan los justos para enfrentarse a la injusticia de los que los oprimen y a la crueldad de los que los agreden. Nos permiten defender nuestro derecho a vivir, y el de los seres a los que amamos, y nos aseguran que, llegado el caso, podremos enfrentarnos a los poderosos.

El propio concepto de democracia no comulga con el absolutismo de un estado que monopoliza el uso de la violencia, porque todo poder político se fundamenta en la fuerza de las armas y cuando nada le puede hacer frente entonces ese poder se convierte en absoluto. Por eso la ordenación democrática de una nación debe obedecer al reparto igualitario de poderes entre los que gobiernan y los ciudadanos gobernados, para que estos últimos tengan la oportunidad de desafiar a la autoridad desligada de la voluntad de la sociedad. Bien sabe la Historia que no han progresado las naciones sin verter la sangre de los patriotas que aman la libertad, y que no ha habido un tirano en el mundo que entregase de buena gana el poder.

Es por ello que afirmamos que existe verdaderamente un *derecho natural a las armas*.